

El insurgente

ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO Y DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

AÑO 29 / NO. 251 / SEPTIEMBRE 2025

*¡GUERRA,
GUERRA!
EN EL MONTE,
EN EL VALLE,
LOS CAÑONES
HORRÍSONOS
TRUENEN*

*Y LOS ECOS
SONOROS
RESUENEN
CON LAS VOCES
DE ¡UNIÓN!
¡LIBERTAD!*



ÍNDICE:

EDITORIAL / 3

ARTÍCULOS

VIOLENCIA DE CLASE Y CONTRADICCIONES EN EL PARTIDO HEGEMÓNICO BURGUÉS/ 4

UNA CARACTERÍSTICA DEL RÉGIMEN QUE SE CONFIRMA/ 12

DESAPARICIÓN FORZADA: DIMENSIÓN DE TERROR DE ESTADO/ 14

EN MÉXICO SE CRIMINALIZA Y JUDICIALIZA LA CRÍTICA POLÍTICA/ 16

PARAMILITARISMO CON DISFRAZ REVOLUCIONARIO EN MICHOACÁN/ 20



REVOLUCIÓN A DEBATE

RUMBO AL ABISMO DE LA CRISIS/ 24

PENSAMIENTO DEL MILITANTE COMUNISTA

**NUESTRA ACTIVIDAD
REVOLUCIONARIA/ 27**

ANÁLISIS INTERNACIONAL

**VIOLENCIA PARA RECOMPONER LA HEGEMONÍA ROTA DEL IMPERIALISMO
NORTEAMERICANO/ 31**

COMUNICADOS

DEL COMITÉ CENTRAL, 28 DE AGOSTO DE 2025/ 35



Himno Nacional Mexicano/ 38 y 37

Editorial

En México por el conjunto de reformas que han sido aprobadas en diferentes tópicos se confirma una tendencia general, se configura una política de gobierno con rasgos profascistas y en allanar el camino para la imposición desde la ley de una junta militar con rostro civil.

Lo que en el pasado reciente se denunció como inaceptable por quienes le dan vida a Morena, hoy como partido hegemónico en la política burguesa y en la administración federal, estatal y municipal es presentado como un logro político, discurso que propositivamente trata de ocultar la tendencia hacia una salida profascista a los problemas que aquejan a nuestro país.

Un botón de muestra lo constituye el conjunto de medidas que hoy autoriza la ley, por ejemplo, la identificación biométrica que tiene por fin tener mayor control de la población desde la concepción reaccionaria, en ese sentido es necesario recordar que el control social como política tiene origen en los regímenes fascistas.

En esa misma tesitura está la legalización de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) en el poder judicial por sus funcionarios, que ilustra la magnitud del cretinismo social y la perversidad en aplicar la ley contra los oprimidos por todo el aparato burocrático judicial, que se caracteriza por la mediocridad.

En el campo de las ideas cada planteamiento político tiene un contexto político e ideológico y obedece a los intereses de clase a la que se pertenece o defiende, en ese sentido, los planteamientos del gobierno federal con lenguaje de partidos o líderes de países socialistas están fuera de contexto y contenido político-ideológico, un país socialista persigue objetivos muy diferentes a uno del orden capitalista; resulta una vulgaridad política presentar desde la “izquierda” conceptos y objetivos ajustados a los intereses de la clase burguesa.

En el capitalismo, por muy “democrático” que sea se explota y oprime a las masas trabajadoras, éstas tienen que vivir bajo la condición de parias modernas por el grado de explotación y opresión capitalista, de ahí que resulte absurdo medir la felicidad del pueblo que es explotado y oprimido, acaso ¿Es feliz un esclavo moderno? Solo en la inmundicia de la alienación se procede en esa dirección, es decir, perdiendo cada vez más su humanidad.

En el capitalismo no puede existir vida sin pobreza, tiene que ver con la desigualdad social y expresa la polarización de la sociedad; en un régimen político producto de la democracia burguesa no hay justicia económica, política y social, lo que existe es explotación económica y opresión política.

La felicidad del pueblo tiene que ver con los medios materiales de subsistencia necesarios para garantizar con dignidad la vida, por el régimen social vigente en México, existe la polarización de la sociedad que se expresa en millones de mexicanos en la pobreza y una minoría que centraliza y monopoliza la riqueza social.

El acuerdo de seguridad con Estados Unidos se confirma a pesar de que la administración federal lo negaba, en los hechos el representante norteamericano vino para garantizar en el terreno la imposición de las exigencias del gobierno estadounidense en materia de seguridad, el hecho es contundente, la actual junta administrativa está sujeta a los intereses del imperialismo norteamericano.

Este acuerdo pone a México como apéndice del aparato policiaco militar norteamericano, la creación de un cuerpo policiaco transfronterizo está en esa lógica, que al mismo tiempo ilustra el fortalecimiento del Estado policiaco militar, medidas de mayor control social que expresan rasgos profascistas del régimen que se presenta como “transformación”.

Desde la política de seguridad el imperialismo norteamericano fomenta en América Latina la implantación, sea por la vía institucional o por la fuerza, de dictaduras militares con rostro civil, es el caso de El Salvador y Argentina.

La junta administrativa que encabeza Morena, por su actitud política ante las exigencias norteamericanas resulta altamente redituable a la burguesía y al imperialismo norteamericano, una pieza servil y clave en América Latina.

PDPR-EPR



ARTÍCULOS

VIOLENCIA DE CLASE Y CONTRADICCIONES EN EL PARTIDO HEGEMÓNICO BURGUÉS

Diferentes acontecimientos en la palestra nacional nos ilustran la política del gobierno que presenta a un país muy diferente al que objetivamente se vive; la demagogia prevalece como parte de dicha política, el posicionamiento gubernamental, por lo regular, resulta contrario a la realidad, así el país sigue en la ruta del desgarramiento por la violencia que emerge por el régimen político y económico, es decir, el capitalismo.

En términos concretos, desde el gobierno a pesar de los dichos en defensa del pueblo, se defiende y garantiza los intereses de una minoría que acumula mayor riqueza producto de la explotación; se protege dichos intereses con leyes que cada vez son más opresivas y justifican la acción del aparato represivo en nombre de la ley.

La corrupción permea a todo el aparato burocrático, es parte de su propia existencia en donde funcionarios públicos de todos los niveles, políticos de oficio de todos los partidos electorales, empresarios y elementos del aparato policiaco militar ven en la política burguesa una forma segura y rápida de enriquecimiento, así todo político de oficio entra al juego de la política burguesa para cumplir su sueño: ser un “distinguido” empresario.

Morena prometió transformar al país, no obstante, dicha transformación solamente ha sido de palabra y a pesar de ser el partido hegemónico en los tres poderes de la nación el cambio social no llegará, por el contrario, emergen públicamente las contradicciones que lo corroen desde su interior.

Las contradicciones internas en Morena exhiben

a un partido político carcomido por ellas, marcha inexorablemente hacia la contradicción e implosión política. Las pugnas internas han permitido exhibir la principal debilidad de Morena, su posición moralina y su incongruencia política producto de la falta de homogeneidad política e ideológica.

El fuego amigo en el senado que señala la existencia en *la 4T de ratas ligadas al narco*, habla de la corrupción al interior de dicho partido, y por corrupción nos referimos a la material y a la moral, ambas como reflejo de la concepción ideológica burguesa que determina la valoración y actuación cotidiana del individuo bajo el beneficio personal.

A continuación, los fenómenos de la realidad que indican la continuidad de una política de gobierno falsamente popular, la falsa posición antiimperialista y el carácter oprobioso del régimen; la coyuntura que vive el país transita por el fortalecimiento del Estado policiaco militar, el reacomodo del poder judicial y el apuntalamiento del estado de derecho oligárquico y mayor dependencia con respecto al imperialismo norteamericano.

La desaparición forzada como expresión de la violencia de clase contra los oprimidos

El fenómeno de la desaparición forzada de personas persiste a pesar del discurso oficial, la estadística a diario se incrementa y adquiere nuevas facetas, sin embargo, en todas ellas hay un rasgo común, en su cometido se encuentran involucrados agentes del Estado.

Desde la posición gubernamental y posiciones

afines a ella se esfuerzan por endosar la responsabilidad al ente del crimen organizado, otorgan a éste características omnipotentes, no obstante, lo real del fenómeno está a la vista de las víctimas de la violencia que emana de todo el régimen: el Estado es el responsable de la violencia que afecta fundamentalmente a las masas trabajadoras, sea por comisión u omisión.

La acción de los organismos que hace apología a la violencia no se puede entender sin la participación estructural del Estado, en ese proceder hay historia, al movimiento revolucionario se le combatió a través de grupos que sembraban y comerciaban con estupefacientes, adoptaron en esencia la forma y accionar del paramilitarismo, un método contrainsurgente que aún es promovido por todo el aparato policiaco militar.

El botón de muestra está en el multicitado grupo *La barredora*, un grupo armado criminal que operaba bajo las órdenes directas del entonces secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el caso nos ilustra el involucramiento directo de agentes del Estado en el cometido de todo tipo de delitos y crímenes de lesa humanidad.

En Tabasco se cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, despojo de tierra y propiedades, el tráfico y venta de mercancía nociva para el ser humano, es decir, toda la variedad de la labor criminal pasaba por *La barredora*, organismo criminal-económico creado desde el Estado, de ahí emergieron empresarios producto de la violencia contra las masas ligados al grupo *Tabasco*. Luego entonces la conclusión es contundente, lo sucedido en Tabasco acontece en todo el país, los más aberrantes crímenes contra el pueblo los cometen agentes del Estado con uniforme policiaco o militar o los cometen criminales de Estado con disfraz de *narcotraficantes o delincuentes organizados*.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por la magnitud del fenómeno ha quedado rebasada, carece de una política nítida en defensa de las víctimas, producto de la política de gobierno que niega la esencia del fenómeno, lo minimiza e

incluso hace intentos por diluir la responsabilidad del Estado.

La renuncia de la titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, era una demanda de familiares de víctimas de desaparición forzada por su incapacidad para enfrentar el fenómeno que tanto daño ha causado a cientos de miles de mexicanos y la indolencia hacia el dolor de quienes buscan a sus seres queridos.

La renuncia actual y, en el pasado la de Karla Quintana por documentar la existencia de más de 100 mil desapariciones forzadas en el país, ilustra el fracaso de las dos administraciones morenistas para encarar adecuadamente el fenómeno de la desaparición forzada de personas, en la medida que se endose el cometido de las desapariciones forzadas al crimen organizado o a la delincuencia en abstracto se transita por una senda equivocada, los hechos evidencian que las desapariciones forzadas en México las cometen agentes del Estado.

La esencia de la política de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas queda de manifiesto en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la de nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En el primer caso se insiste en “presentar nuevas líneas de investigación”, éstas como señalan los agraviados conducen nuevamente a la “verdad histórica” creada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

En el caso de nuestros camaradas a pesar de la resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se ha hecho nada efectivo para dar con su paradero, conocer la verdad y condición actual. Los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) están empantanados, no presentan avance significativo producto de la política de gobierno que pondera protección a los responsables de tan deleznales crímenes, en concreto, a elementos del Ejército mexicano.

En ambos casos hay un hilo conductor, se obra desde las instituciones bajo una línea: garantizar impunidad a los perpetradores, en específico al

Ejército mexicano y connotados políticos burgueses que se caracterizaron por represivos como es el caso de Evencio Nicolás, exprocurador de justicia de Oaxaca; a destacados agentes policiacos que en su trayectoria han destacado por asesinos de Estado, represivos y entes contrainsurgentes, como sucede con el excomandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR), Pedro Hernández Hernández, responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en la región de los Loxichas, contra militantes del MULT y trabajadores de la educación.

La política de los gobiernos morenistas se caracteriza por minimizar o negar el fenómeno de la desaparición forzada, alega una herencia maldita sin asumir el hecho de que como gobierno durante un sexenio y lo que va del presente se han cometido miles de desapariciones forzadas producto de su política, ésta cada vez es más parecida a la que asumieron gobiernos del PRI y el PAN, fincaron la seguridad pública en la doctrina contrainsurgente de la Guerra de Baja Intensidad (GBI).

La “pacificación del país” como expresión de la política de seguridad pública está fincada en la violencia contrainsurgente, por más que se trate de disfrazar, la actuación de los cuerpos policiaco militares está fincada en el combate del enemigo interno, he ahí su condición violenta y criminal contra el pueblo; de esa condición emerge el intenso proceso de militarización de la geografía y la vida pública del país, que toma nuevas expresiones, una de ellas la legalización de las aspiraciones de militares por asumir la presidencia, una ruta muy peligrosa porque allana el camino para una dictadura militar con rostro civil.

La magnitud numérica del fenómeno de la desaparición forzada de personas sigue inexorablemente en crecimiento e indica que la violencia que vive el país afecta fundamentalmente a los desposeídos; la expresión cualitativa de dicho fenómeno expresa que los crímenes de lesa humanidad en nuestro país son violencia de clase, es decir, violencia burguesa contra el pueblo explotado y oprimido.

Escándalo político y contradicción interna en Morena

Las contradicciones internas en Morena se revelan una tras otra, todas apuntan a un mal que tienen todos los partidos burgueses, la corrupción y la simulación, que se conocen por el fuego amigo y la campaña mediática orquestada desde los monopolios de la comunicación con un carácter anticomunista.

Las acusaciones de que *en la Cuarta Transformación hay ratas y ligadas al narco*, vienen a confirmar un secreto a voces e ilustran que la política burguesa es una ruta para el enriquecimiento rápido y seguro.

La composición de Morena se ha dado con el reclutamiento de políticos de oficio que respaldaron las políticas de gobierno tanto del PAN como del PRI, de perredistas que fueron fervientes priistas y se enrolaron en Morena, integrantes de otros partidos que vieron truncadas sus aspiraciones personales, es lógico esperar que esa composición heterogénea sea el motivo de presentes y nuevas contradicciones.

El meollo del asunto no estriba en si el político de oficio en su vida faraónica lo hace con sus recursos o del erario, lo que define el carácter de clase de un personaje de la política burguesa son sus actos y sus ideas.

Un funcionario público y el político de oficio están bajo el escrutinio público, están sujetos a la crítica del pueblo y por tanto deben a éste claridad de su proceder, en esos términos no hay vida “privada”, tampoco vale el argumento de que *por trabajar en el sector privado* se puede hacer apología a las formas burguesas de existencia.

Los viajes que han realizado figuras destacadas de Morena al extranjero, dejemos por sentado que son sufragados con sus propios medios, nos ilustra el carácter incongruente de dichos políticos de oficio, por las banderas políticas, ideológicas y morales que dicen profesar resultan incongruentes.

Política y moralmente es incorrecto su proceder,

aunque no exista un acto de corrupción jurídico, como pretende argumentar la dirigencia de Morena, ningún trabajador puede sufragar vacaciones de dicha naturaleza y los hechos exhiben a políticos de oficio ricos o en la ruta de enriquecimiento alejados material e ideológicamente del pueblo trabajador a quien dicen representar. ¿Qué trabajador puede costear unas vacaciones de cientos de miles de pesos? ¿Qué trabajador que gana 400 pesos al día puede costear una cena de decenas de miles de pesos?

Morena ha exhibido un flanco débil ante sus adversarios políticos, éstos lo único que han hecho es explotar dicha debilidad, no obstante, hay que señalar que en dicha contradicción los políticos de oficio que nutren al PRI y al PAN, proceden de la misma manera, su reclamo es por la hipocresía con la que se conducen quienes hoy tienen la hegemonía política en los tres poderes de la nación, en el panorama político mexicano un corrupto grita espantado, ¡ahí va un corrupto, agárrenlo!

Una doble verdad surge, antes los politicastros se realizaban en el bienestar burgués con dinero del erario, el lujo y el derroche eran exhibidos como éxito en la vida, así se las gastaban los del PRI y el PAN, no quedaron fuera los del PRD, ahora desde Morena se hace exactamente lo mismo, la pequeña diferencia estriba en el discurso, que justifica que esos lujos se realizan con recurso propio, lo cual no diluye la esencia por su condición de sujeto público.

Esa pequeña diferencia, en efecto, no los hace ser lo mismo, podemos decir que son peor porque resultan embusteros y cínicos desde una posición moralina. Su proceder llama a la reflexión ¿De dónde sale el recurso económico para cubrir viajes al extranjero fincados en el derroche, el lujo y la exhibición de riqueza y poder? Aunque sea su dinero, lo que lleva implícito es el apego y adulación a la propiedad privada, lo reprochable políticamente es hacer alarde de poder económico y político gracias a los suculentos sueldos que perciben.

No se trata de definir grotescamente qué es *vivir en la justa medianía*, de establecer en la ley a qué tiene derecho y qué no el político de oficio, éste

o se rige por vivir bajo el bienestar burgués o el bienestar proletario, el primero hace apología al lujo, al derroche, a los actos triviales que exhiben poder y riqueza; el segundo, es la expresión de vivir con dignidad humana, lo cual no significa vivir como fraile franciscano.

Cuando el político de oficio se exhibe en sus viajes de placer, en sus fiestas consumistas, cuando ventila su poder económico al difundir por redes sociales o cualquier otro medio su “casita”, su “carrito” o la “troca”, lucir “sus garritas” que lleva puestas en la humanidad, cuando hace alarde de posición económica solvente cae en la presunción social, es decir, se pone por encima de cualquier trabajador del campo o la ciudad y brilla su petulancia.

Política y moralmente no es correcta la defensa a ultranza de los políticos de Morena que hacen gala de poder económico en sus viajes de descanso, constituye error político porque se proyectaron en una catadura moral que no tienen, no son sensibles a la crítica, su soberbia política los aleja cada vez más de los intereses populares.

Ofensiva anticomunista de la reacción

A través de los monopolios de la comunicación la reacción en México ha orquestado una ofensiva contra el gobierno morenista, políticamente expresa una exigencia económica y la venganza ante el incumplimiento de acuerdos económicos establecidos en 2018.

Ideológicamente enarbola el anticomunismo para dar contenido a su ofensiva política que abarca el combate frontal al gobierno mexicano, la descalificación absurda y vulgar de gobiernos legítimamente establecidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En su argumentación de carácter reaccionario proyecta a Rusia y su gobierno como violento, invasor y criminal; eleva a criminales y dictadores a los presidentes de Cuba, Venezuela y Rusia.

En esa misma argumentación presentan a Zelenski como héroe de la democracia occidental y

presentan al gobierno norteamericano como la tabla de salvación para superar la violencia en México.

En resumen, ven comunistas donde no los hay, porque el gobierno mexicano no tiene esa condición, tampoco los políticos de oficio que le dan vida a Morena; glorifican el fascismo ucraniano y a un criminal de Estado (Zelenski), se le presenta como paladín de la democracia; niegan políticamente el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación, Cuba y su pueblo heroico no es producto de los deseos de tal o cual dictador, es la expresión de la voluntad popular que decidió transitar por el socialismo.

Las paradas políticas de tal o cual político de oficio no se deben ver de manera simplista, en política no hay discurso inocente, cada propuesta y análisis, toda opinión expresada públicamente refleja una posición de clase.

Sólo era cuestión de tiempo para que saliera el peine y se confirmara el carácter reaccionario y prooligarca de diferentes actores políticos que se presentan como incólumes y defensores de la democracia en abstracto, por ejemplo, la senadora Lilly Téllez emerge abiertamente como proimperialista que llama a la intervención norteamericana; Sandra Cuevas se presenta como empresaria y política en una campaña electoral adelantada por la CDMX y lanza a Ricardo Salinas Pliego como candidato a la presidencia para el 2030; la alcaldesa Alessandra Rojo escupe toda la basura anticomunista aprendida del oligarca Salinas Pliego y la ultraderecha europea y forma su movimiento *Resistencia Democrática* para agrupar a toda la reacción; el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, sin tapujos sostiene que los empresarios generan valor para México y presenta al Grupo Salinas y a su dueño, el oligarca Ricardo Salinas Pliego como sinónimo de éxito y honestidad.

Lo relevante, los discursos de los “defensores de la democracia” emergen como arlequines de los intereses de la burguesía y la oligarquía, en sus discursos encontramos los mismos términos, las mismas palabras, las mismas expresiones peyorativas que ha realizado dicho oligarca,

promotor activo del anticomunismo en nuestro país y de la intervención militar norteamericana que en el fondo persigue convertir a México en colonia estadounidense.

Discursos, entrevistas y planteamientos políticos de la reacción en conjunto nos ilustra que hay burgueses y oligarcas que hacen política por una sola razón: defender a toda costa sus intereses de clase para garantizar privilegios y condición de explotadores; exhibe el carácter de clase y la crisis que vive la democracia burguesa, los políticos de oficio vulgarizan la política, ésta la conducen por la trivialidad y promueven una actitud antropófaga; y deja traslucir la crisis por la que atraviesa el Estado burgués mexicano, éste ya no es capaz de garantizar los intereses de toda la oligarquía y ésta, una parte de ella, exige más y más privilegios bajo el entendido de que “generan riqueza”, lo cual es falso, lo que generan es explotación económica, sobre ella está fincada su riqueza.

Dependencia y funcionalidad con respecto al imperialismo norteamericano

Una a una de las exigencias del gobierno norteamericano se han impuesto o han sido acogidas por el gobierno mexicano a pesar de su discurso patriotero, invariablemente se ha confirmado el carácter dependiente y funcional del gobierno mexicano, del carácter dependiente y funcional de la economía capitalista del país.

En los políticos de oficio que hoy están enrolados en Morena, en los funcionarios que dicen enarbolar las banderas de la supuesta cuarta transformación se declaman altisonantes expresiones de defensa a la soberanía, lo real es que solamente eso queda en discursos y paradas mediáticas que no detienen la ofensiva injerencista del imperialismo norteamericano.

Las declaraciones del titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Luis Ebrad Casaubón, de que México hizo todo lo que tenía que hacer en la negociación con Estados Unidos, constituyen una confesión de parte, ya no hay nada que hacer ante la exigencia norteamericana y solamente había que

esperar el 1 de agosto para ver por donde le da el gobierno norteamericano.

No se quiere ver que el T-MEC ha llegado a su fin y que la exigencia norteamericana está en función de forzar a un acuerdo aún más leonino, imponer una mayor cuota de beneficios para el capital monopolista transnacional a través de mayores aranceles que se imponen bajo el presupuesto del poder económico y militar norteamericano.

Como en otros rubros de la política, el gobierno mexicano niega acuerdos que afianzan la dependencia, sin embargo, al paso de los días la imposición norteamericana emerge mediáticamente, por ejemplo, se dijo que los aranceles no pasarían y pasaron uno a uno; se aseguró enfáticamente que no había acuerdo en materia de seguridad, no obstante, éste se anuncia a los pocos días que se firmaría con lo cual se solidifica la dependencia policiaco militar y la política de seguridad norteamericana se impone como condición a la de México, con ello la dependencia es inocultable, al mismo tiempo, el aparato policiaco militar mexicano se traduce en una extensión del norteamericano.

La amenaza de la intervención militar norteamericana

La dependencia en seguridad pública con respecto al imperialismo norteamericano se expresa en la entrega de afamados delincuentes, sean confesos o presuntos, lo sintomático es que el Estado mexicano revela su incompetencia por ejercer el estado de derecho y permite de buena gana que sean juzgados por el sistema penal norteamericano por delitos ya juzgados en nuestro país; y la incursión de fuerzas militares sea en territorio mexicano o en aguas nacionales, siempre bajo el ardid de la “colaboración” en la lucha contra el narcotráfico.

En los hechos se traduce en responder con torpeza ante la amenaza de la intervención militar, ésta es real y no hipotética, se cierne como una amenaza inocultable contra nuestro país y pueblo, no obstante, ante la intimidación se actúa con mayor entreguismo, el cual no se disimula, se trata

de justificar bajo el ardid del supuesto combate al narcotráfico.

El argumento norteamericano del combate al narcotráfico y de “borrar de la faz de la Tierra” a los cárteles mexicanos, en palabras de Tom Homan, expresa con nitidez la política injerencista y militarista del gobierno de Trump. Viejo argumento contrainsurgente para justificar la intervención militar en cualquier parte del mundo, además, con ello se levanta una cortina de humo para encubrir uno de los objetivos, incautar millones de dólares a los entes criminales para oxigenar la economía norteamericana, ésta se encuentra en crisis y necesita efectivo para reactivarla, significa que el gobierno norteamericano en su autocondición de gendarme mundial decidió cobrar el impuesto económico a quienes han hecho fortuna bajo el mercado negro, en la economía capitalista subterránea, el resto de cómo se presenta el fenómeno solamente es retórica gubernamental, sea la norteamericana o la mexicana.

En ese contexto de amenaza de la intervención militar surgen voces que plantean modificar el himno nacional mexicano por considerar que es muy violento, son lenguas de la reacción que manifiestan su condición proimperialista.

Nuestro himno tiene un profundo carácter antiimperialista, surgió en el marco de la lucha contra la intervención francesa y en la actualidad mantiene vigencia, por lo tanto, la defensa de los intereses del pueblo pasa por retomar esas notas que llaman al combate ante cualquier amenaza extranjera.

La reflexión necesaria que emerge es ¿Qué van a hacer los políticos de oficio si el imperialismo norteamericano interviene militarmente en nuestro país? ¿Se llamará a la defensa de la patria de manera activa o solamente quedará en discursos que llamen a la cordura y a serenarse? ¿Se armará a todo el pueblo para enfrentar al enemigo intervencionista?

No se deben tomar a la ligera las amenazas abiertas o veladas de la intervención militar, por el contrario, se deberían tomar medidas puntuales

para estar preparados ante semejante peligro, una de ellas, convocar a la formación de milicias populares, armar al pueblo y prepararse para la defensa, aunque en las actuales condiciones y el tipo de gobierno en México es pedir mucho.

La dictadura de opinión

Los gobiernos morenistas destacan por imponer la dictadura de opinión y castigar a quienes ejercen la crítica política hacia las administraciones guindas, en nombre de la ley se coarta el derecho a la libre expresión y en nombre de la violencia de género se asume una posición gubernamental autoritaria.

Los tiempos de la *santa inquisición* y los métodos feudales para imponer la visión de la clase en el poder y sus administradores no se han ido, en nuestro país se reproducen en la medida que se imponen medidas reaccionarias, como la de un interventor para garantizar censura al diario *Tribuna de Campeche* por ejercer el derecho a la crítica.

En esta tesitura la gobernadora Layda Sansores San Román emerge como autoritaria, muy sensible a la crítica que la asume como un ataque personal, olvida u omite que como funcionaria pública está bajo el escrutinio de todo ciudadano, sea su opinión a favor o en contra del gobierno que encabeza.

Con medidas de tal naturaleza que se han aplicado también en otras entidades gobernadas por Morena se viola premeditadamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la organización independiente.

En los gobiernos priistas y panistas la dictadura de opinión se ejerció a través de la censura y la autocensura; en los gobiernos morenistas se impone bajo la argucia de violencia de género, en esencia es la censura que confirma la existencia de un estado de derecho oligárquico.

Irónico, ayer quienes dieron vida a Morena criticaron el proceder autoritario tanto de los gobiernos priistas como panistas, hoy, ya como el partido hegemónico, reproducen cada una de las trapacerías que criticaron a sus homólogos en política.

Es reaccionario encubrirse en la ley que sanciona la violencia de género para diluir la esencia de la crítica que realizan algunos trabajadores de la comunicación, con dicho posicionamiento se quiere desdibujar la esencia de su proceder, quien ocupa puestos públicos o de representación popular pertenecen al poder burgués, por tanto están sujetos a la crítica, a la observación popular y al mismo tiempo están obligados a rendir cuentas, si éstas no cuadran porque no cumplieron con las promesas de campaña, la crítica es válida y necesaria.

Justo es necesario preguntar: ¿A cuántos ciudadanos van a meter a la cárcel por cuestionar sus viajes al extranjero? ¿A cuántos van a multar por cuestionar las cantidades obscenas gastadas en sus vacaciones? ¿A cuántos se les va a sancionar con pedir disculpas todos los días en la cámara de diputados o senadores? Vaya políticos burgueses que se presentan como defensores del pueblo, al hacer apología de las formas burguesas de hacer política y del bienestar burgués resultan cursis y se victimizan ante la crítica.

La represión como política de gobierno

La represión como política de gobierno es propia de gobiernos autoritarios, una realidad que en nuestro país queda retratada en el proceder de gobiernos morenistas, en esa ruta represiva destacan el de Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

En este último no hay mes que no sea nota nacional, en su proceder se niega el derecho a la protesta y a la organización independiente; y no se hace nada por detener la acción paramilitar contra organizaciones campesinas-indígenas.

Se persigue políticamente a quienes cuestionan la política del gobierno, éste que se ufana de representar a los indígenas marcha ajeno a los intereses del pueblo trabajador, con ello queda de manifiesto que el factor racial no es el determinante en la política sino la posición política e ideológica de clase que se tenga y se asuma.

Uno de los últimos actos represivos se

cometió contra trabajadores de la educación del nivel telebachillerato comunitario, reprimidos y desalojados el día 12 de agosto por la policía estatal, se cumplió la amenaza del secretario de gobierno, Jesús Romero, y con ello queda al descubierto su condición autoritaria.

La política del gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, brilla por incompetencia deliberada, no se atiende ni se resuelven las exigencias populares, todo queda en promesas incumplidas; a la exigencia popular desde el gobierno estatal se le antepone la amenaza y la represión gubernamental.

La política de represión no estriba solamente en la utilización de los cuerpos policíacos, se materializa en la amenaza policíaca, en la anulación de facto al derecho a protestar, a organizarse de manera independiente y a la libre expresión.

La imposición de la dictadura de opinión expresa una política represiva que tiene por propósito ahogar en represalias de todo tipo la crítica a las administraciones y a los políticos de oficio morenistas.

Enfilar la crítica a los resultados nimios de las administraciones morenistas como violencia de género constituye represión, es a la vez una regresión política que se finca en una concepción reaccionaria de la sociedad y el hombre.

En el país existen presos políticos, a éstos se les imponen penas de decenas de años de cárcel, se aplica un estado de derecho oligárquico, en consecuencia, se procede criminalizando a los luchadores sociales al presentarlos como delincuentes del fuero común y no como luchadores por la transformación social.

Por todo el país se arman carpetas de investigación a través de las fiscalías estatales o la fiscalía general, todas tienen un común denominador: criminalizar a los que protestan, quitar el carácter político de sus demandas y crear falsos vínculos con entes criminales o grupos armados revolucionarios.

La perversidad sale a flote con el artilugio leguleyo de la figura del testigo protegido que todo

cuanto “confiese” es palabra sagrada y con la figura jurídica de la conexidad en automático se vincula a los luchadores sociales y a cualquier ciudadano al movimiento revolucionario. En este marco emergen los falsos culpables, los presos políticos que son presentados como delincuentes.

A los que luchan por la transformación social se les castiga con decenas de años de cárcel, en cambio, a quienes detienen bajo el cargo de ser parte del mundo criminal se les trata con condescendencia, se les permite llevar el juicio en libertad, claro, bajo una fuerte fianza económica.

En las gestiones morenistas queda de manifiesto que el estado de derecho se aplica sin contemplaciones a los que protestan, a los organizados, a quienes pugnan por el cambio social; constituye error afirmar que no existe estado de derecho, existe y es de carácter burgués en lo general y en lo particular es prooligarca, por ejemplo, la ley que sanciona la protesta en las casetas de cobro beneficia a los burgueses que son dueños de empresas de transporte de carga y de los monopolios de autotransporte, así como de conccionarias.

En general, el país vive bajo la violencia que emerge del régimen social, ésta afecta principalmente a los desposeídos que alimentan la estadística oficial de las víctimas, las cuales no son reconocidas en su totalidad por las autoridades gubernamentales; la impunidad es característica de los cuerpos policíaco militares, los agentes de Estado son protegidos por el estado de derecho; todo el aparato policíaco militar actúa bajo la doctrina de la contrainsurgencia norteamericana y la dependencia en materia de seguridad es cada vez mayor; la descomposición social es manifiesta, la sociedad capitalista se pudre cada vez más y a diario afloran las miasmas del sistema; la dependencia con respecto al imperialismo norteamericano es manifiesta y emerge como supuesto acto de patriotismo; la democracia y la política burguesa ilustran la vulgaridad de los políticos de oficio, éstos están muy alejados de los intereses del pueblo trabajador.

PDPR-EPR

UNA CARACTERÍSTICA DEL RÉGIMEN QUE SE CONFIRMA

En México, bajo los gobiernos morenistas se pretende instaurar la gobernabilidad “pacífica” de la oligarquía partidaria de un régimen más autoritario con ropaje popular, humanista y democrático, como parte de una tendencia política mundial del imperialismo en la época actual.

Dicha gobernabilidad no es otra cosa que hacer pasar el poder burgués, la dictadura de clase, como un gobierno legítimo, representativo de todas las clases y sectores sociales. A eso obedece que una de las mayores prioridades políticas en las que han centrado sus esfuerzos las administraciones morenistas son la gobernabilidad a base de la política de la percepción; la política de seguridad tiene ese eje rector, por eso el esfuerzo principal de la actual administración está puesto en la manipulación y administración facciosa y tendenciosa de las cifras y no en la realidad.

Obviamente desde la oficialidad dicha gobernabilidad se presenta como una demanda y necesidad de la sociedad, para lo cual se ha utilizado la “inseguridad” como argumento legitimador. Y en dicha inseguridad, el activo de mayor utilidad es la delincuencia organizada y el narcotráfico.

En términos reales de la lucha de clases, dicha gobernabilidad significa darle estabilidad y legitimidad al dominio de clase, a la dictadura burguesa, para que se acepte desde las propias masas oprimidas como si fuera la expresión de su propia voluntad, ese es el papel de la democracia burguesa; y, terminar con todo elemento, ya sea a nivel de entes políticos o individuales, que pueda poner en riesgo al régimen, es decir, reducir y/o eliminar las “amenazas” del *statu quo*. A este orden burgués y dictadura de clase está direccionada la seguridad nacional del país.

Desde la doctrina militar del Estado mexicano,

el concepto de seguridad nacional se refiere a combatir al enemigo interno, lo que no es ninguna novedad, pero lo que sí es novedoso es la celeridad con la que han avanzado estas administraciones en legalizar las medidas contrainsurgentes destinadas a evitar precisamente los riesgos y amenazas al *statu quo*, priorizadas y ubicadas desde esta concepción reaccionaria.

La maquinaria morenista, que se ha constituido en fuerza política hegemónica del régimen, está en condiciones de hacer pasar cualquier iniciativa como ley; las posibilidades que ha adquirido al tener alineados a los tres poderes del Estado, se equiparan solo al que tuvo en sus mejores tiempos el PRI.

A estas alturas ya no cabe ninguna duda sobre el verdadero carácter y naturaleza de Morena; como fenómeno fue una maniobra política para mediatizar el descontento popular y evitar una revolución social, frustrarla por la vía reformista.

El robo de banderas políticas es para desgastar el argumento y la necesidad de la transformación radical en México y el cambio de régimen socioeconómico. Para quienes militamos en el PDPR-EPR la necesidad y posibilidad de la revolución social es esencia de nuestra lucha, no obstante, para quienes le dieron el privilegio de la duda a la vía reformista, hoy se encuentran en la ruta de la frustración, porque Morena resultó emulador de las políticas del PRI y el PAN.

Los cambios hechos a la constitución política, con las reformas aprobadas y las leyes creadas en los últimos cuatro sexenios, en materia de seguridad y población, se suman a la tendencia profascista que los políticos de oficio han impulsado desde 1964, apegados a los manuales de la doctrina de contrainsurgencia dictados desde Washington D. C.

Lo aprobado en materia de seguridad pública está completamente alineado y encuadrado dentro de los lineamientos de la Guerra de Baja Intensidad, no hay nada de lo aprobado hasta ahora que escape a esta característica. Con lo cual se dota al actual gobierno y a los sucesivos de un carácter abiertamente contrainsurgente, con amplias facultades para violar de forma legal lo que hasta ahora eran considerados derechos constitucionales y humanos inviolables, al menos en la letra.

Todo lo que ha sido aprobado como reformas, confirman la tesis política del carácter transexenal de la política del Estado mexicano, de los gobiernos más allá de sus siglas partidistas, ya que muchas de dichas reformas son iniciativas que vienen desde los sexenios panistas y priistas, es el caso de la CURP biométrica. Concretamente planes, proyectos e iniciativas que datan del 2000 en adelante en función del control social.

Al final, es un solo proyecto el que está de fondo en las reformas aprobadas tanto en el actual sexenio, como en los anteriores, se trata del proyecto de la clase burguesa que deriva de la dependencia con respecto al imperialismo norteamericano.

Lo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se denominó paquete de reformas neoliberales, es lo que se ha aprobado por las administraciones morenistas, solo que bajo el ropaje, discurso y amparo político de la “4T” que pregonan un cambio y transformación inexistentes.

Con un lenguaje aparentemente radical y de izquierda, se le ha dotado al régimen cierta legitimidad, desde el aparato ideológico, los personeros de la oligarquía y hombres del régimen consideran que están dadas las condiciones políticas para imponer un orden más autoritario y reaccionario que permita garantizar el dominio de clase burguesa por varias generaciones sin oposición.

Las prioridades de la actual junta administrativa están puestas en la “governabilidad”, lo que implica “pacificar” al país, como base de la política de seguridad, lo que se traduce en un intenso proceso

de militarización de la sociedad y la geografía mexicana.

En dicha tesis de gobernabilidad y “pacificación” del país sobresalen los siguientes factores a “combatir”: los generadores de violencia, delincuencia organizada y el narcotráfico. Estos son los ejes fundamentales sobre los que está fincada la política de seguridad del gobierno federal y el discurso de todos los hombres del régimen.

En el campo de la lucha de clases, el discurso y el objetivo gubernamental está en función de combatir a los “generadores” de la violencia social: las organizaciones populares que no son parte de la corporativización gubernamental y el movimiento revolucionario.

Claro está que desde la narrativa oficial la inseguridad y la delincuencia organizada-narcotráfico, son el principal argumento y la justificación de toda la política de seguridad, elemento que tampoco es nuevo, este data en lo inmediato desde el sexenio de Calderón y su declaración de guerra al narcotráfico; la única diferencia, incluso así reconocida por Claudia Sheinbaum, es que hoy se aplica con un marco legal: mismas prácticas, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sólo que ahora están normados, son legales.

En los hechos, dicha política fincada en la contrainsurgencia, tiene como principios y ejes rectores las medidas de control social, la violación sistemática de derechos humanos, el espionaje, la vigilancia total y permanente, así como el miedo y el terror, como paradigma de seguridad para garantizar la gobernabilidad de forma “pacífica”.

El objetivo es anular cualquier posibilidad de que el *statu quo* sea puesto en riesgo y así garantizar a futuro el dominio de clase; bajo este supuesto y perspectiva es que con dicha política se pretende aislar a lo que se considera un peligro para la “paz y la seguridad”, es decir para el régimen. Más específicamente, dicha política está confeccionada contra las fuerzas revolucionarias.

PDPR-EPR

DESAPARICIÓN FORZADA: DIMENSIÓN DE TERROR DE ESTADO

La desaparición forzada de personas en México tiene dimensión de terror de Estado. El crimen de lesa humanidad es cometido desde mediados de la década del sesenta del siglo pasado, lejos de marcar una tendencia a su erradicación, registra un crecimiento exponencial en su cometido, en promedio, por día cuarenta personas son víctimas de desaparición forzada.

El comportamiento del fenómeno indica sistematicidad emanada de la doctrina de Estado, sexenio tras sexenio, la junta administrativa en independencia al grupo burgués que representa, se pliega al postulado contrainsurgente que enjuicia a la población como enemigo interno a combatir, a raíz de ese enfoque inmanente a la Guerra de Baja Intensidad se ha militarizado la vida pública y la geografía del país, he ahí, una de las causas profundas que propicia la desaparición forzada en México.

El maquiavelismo gubernamental con que se comete el crimen de lesa humanidad se reproduce junta tras junta administrativa. Los perpetradores operan desde las entrañas de la máquina de opresión, desde el seno de las instituciones del sistema político jurídico se cubre con impunidad, de ese modo se estimula la perpetuidad del crimen de Estado.

En el país, el siglo XXI inició con un incremento de la desaparición forzada de personas, a un cuarto de la centuria el fenómeno sigue su curso creciente. La causa de la tendencia marcada durante 25 años continuos, estriba en la política transexenal con la que se conducen los gobiernos ungidos como junta administrativa.

Todas las administraciones federales que se han relevado el cargo son coparticipes de los crímenes de Estado, del mismo modo, son responsables las personificaciones de ese engranaje de opresión, así que, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo tienen responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad que afecta a miles de hogares mexicanos.

El gobierno actual actúa de manera perversa respecto al fenómeno de la desaparición forzada de personas; desarrolla una postura de negación e indolencia; revictimiza a las víctimas; y, criminaliza a la lucha por presentación con vida que desarrollan familiares, organizaciones populares y organismos de derechos humanos.

Cuando no puede ocultar el crimen, da por hecho que las víctimas están muertas; lejos de instrumentar medidas que erradiquen la práctica de terrorismo de Estado, edifica leyes e instrumenta medidas profascistas con las que se criminaliza a la población e impone sobre el pueblo cadenas de control social al estilo sionista; y, utiliza a la fiscalía para torpedear mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ruin resulta la postura del Ejecutivo federal al señalar que en México no se comete la desaparición forzada de personas. Solo alguien sin escrúpulos puede desconocer a más de 131 mil personas en calidad de desaparición forzada, inhumano es aquel político de oficio que no se inmuta en absoluto al saber que en México al día 40 personas son desaparecidas de manera forzada; y, resulta obscena la maniobra de intentar endilgar

la desaparición forzada a la supuesta delincuencia organizada.

La postura del Ejecutivo federal revela cinismo e impunidad gubernamental. Para la señora con investidura de presidente de la república no son válidas las cifras reconocidas por instituciones del Estado mexicano, sin embargo, el fenómeno es mucho más grande de lo que proyecta esa estadística.

Crimen cometido exclusivamente por el Estado a través de sus agentes, la supuesta peculiaridad con la que intenta distorsionar la realidad el gobierno mexicano no rompe la responsabilidad de los agentes del Estado en el cometido de los crímenes de lesa humanidad, en todo caso, el espectro referido como delincuencia organizada tiene origen en el Estado y obedece a intereses económicos políticos tanto de empresarios como de gobernantes, por tanto, sea por comisión, omisión o aquiescencia el Estado es responsable único por la desaparición forzada de personas en el país.

La incongruencia de los dichos del gobierno en relación a la desaparición forzada ilustra al monstruo que administra los intereses de la dictadura del capital; se niega la existencia del fenómeno para cerrar toda posibilidad de castigar a los responsables e intenta evadir la responsabilidad del Estado ante tribunales internacionales.

El andamiaje institucional creado en el gobierno de López Obrador para “atender” a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y organizaciones que exigen presentación con vida, es sostenido como modelo de excelencia por la actual administración, el resultado concreto es: inmunidad e impunidad para los victimarios.

El andamiaje institucional referido no contribuye en absoluto a la solución del fenómeno, por medio de organismos y dependencias

gubernamentales se distorsiona la realidad, se instrumenta la dilación, el burocratismo y la revictimización.

Que el Estado mexicano desoiga, contravenga y sea omiso de las recomendaciones de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada y violación de derechos humanos, ilustra la magnitud de la impunidad con la que se conduce en lo señalado por el organismo internacional, es un acto de arrogancia autoritaria.

No existe recato alguno en el gobierno mexicano para proteger a los criminales de Estado y perpetuar las condiciones políticas sociales que generan el fenómeno de la desaparición forzada; y, con la negativa de acatar los mandatos de organismos internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno actual genera más condiciones para que la desaparición forzada de personas incremente y los perpetradores vivan cobijados por la impunidad de Estado.

Ante un escenario donde las prácticas de terrorismo de Estado son parte de la gobernanza; la impunidad está garantizada para los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad; el burocratismo, dilación y simulación son rasgos de la política de gobierno; y, desprecio al derecho internacional sobre los derechos humanos.

Ante dicho panorama de violencia que afecta a los desposeídos, la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de manera forzada demanda la unidad de víctimas y organizaciones en torno a reconocer que el responsable de las desapariciones forzadas en México es el Estado mexicano a través del aparato represivo y sus agentes.

PDPR-EPR

EN MÉXICO SE CRIMINALIZA Y JUDICIALIZA LA CRÍTICA POLÍTICA

La administración federal actual y los estados gobernados por Morena criminalizan y judicializan la libertad de pensamiento o expresión de ideas y la crítica política; desde políticos de oficio y funcionarios morenistas bajo la figura jurídica de violencia política en razón de género someten a procesos judiciales a trabajadores de la comunicación o a ciudadanos que emiten opiniones políticas o hacen investigaciones periodísticas.

Los acontecimientos reflejan que se imponen medidas autoritarias, se aplica vía judicial la dictadura de opinión, por gobiernos que discursivamente arengan “no ser lo mismo” que los gobiernos del pasado, pero en la práctica ejecutan la ley contra opiniones críticas o investigaciones que involucran a políticos de oficio o funcionarios públicos en actos de corrupción, desvío de dinero, prepotencia, soberbia y abuso de poder.

El Ejecutivo federal vocifera que en México no se censura, no hay autoritarismo y cada quien puede decir lo que quiera, no obstante, quien hace crítica política o comentarios críticos vía redes sociales es sometido a procesos judiciales, obligado a pedir disculpas públicas por un tiempo determinado o el cierre de su medio informativo o prohibir hablar del político de oficio en mención por uno o dos años.

Quienes trabajan en la administración pública omiten deliberadamente que son funcionarios públicos y están sujetos al escrutinio público, donde pueden ser sujetos a crítica política, luego entonces, si transgreden sus funciones o no son las adecuadas pueden ser removidos de sus puestos. Entonces, ¿por qué no quieren que se conozca sobre los desvíos de recursos, sobre la compra de casas valuadas en millones de pesos, viajes de placer al extranjero, sobre la adquisición de ropa, accesorios o coches que exceden cantidades ofensivas de dinero?

La frase presidencial, No puede haber gobierno

rico con pueblo pobre, es burda y queda en el viento, porque los excesos económicos y viajes en el extranjero de políticos de oficio y funcionarios públicos, finalmente proviene del erario, porque los salarios onerosos y las prestaciones laborales de las que gozan son de los impuestos que paga el pueblo trabajador, recursos económicos que provienen de la administración pública.

La criminalización y judicialización de la libertad de pensamiento o expresión de ideas es política de gobierno en la actual administración morenista, utilizan con perversidad la Ley de Género para silenciar voces críticas y no permitir que se hable sobre su proceder político; la ley argumenta que las mujeres tienen derecho a acceder a las funciones públicas de su país y participar en los asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres, en ese aspecto estamos de acuerdo, sin embargo, no la exime, al igual que el hombre de la crítica política, no por el hecho de ser mujer, sino porque ocupa un cargo público que desempeña funciones en el gobierno que representa.

La Ley de género fue creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar su derecho a la igualdad, el desarrollo y el bienestar, estableciendo principios y medidas de protección integral (...); señala que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular los derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La interpretación de la Ley es ambigua porque, por un lado, habla de la defensa de la mujer por el hecho de ser mujer cuando ocupa un cargo público, pero no

señala que por el hecho de ser funcionaria pública está sujeta a la crítica política de los ciudadanos por el cargo que desempeña, bien puede ser un hombre o mujer, la crítica está presente porque desempeña el cargo de presidente municipal, gobernador, diputado o senador, y la crítica va en sentido de sus funciones públicas más no por cuestiones de género; por otro lado, hay mujeres que emergen como políticos de oficio que utilizan la Ley para impedir opiniones críticas en las que están involucrados por actos de corrupción, abuso de poder o desvío de recursos.

De proteger los derechos de las mujeres, se convierte en coercitiva contra aquellos que emiten opiniones críticas contra políticos de oficio o funcionarios públicos por su proceder gubernamental en la administración pública, eso se convierte en abuso de poder, así como en perversidad política, que permite reprimir a quien opina o emite juicios valorativos en torno a la labor del político de oficio y/o funcionario público.

Llama la atención que en los casos denunciados ante los tribunales proceden inmediatamente y emiten sentencia con rapidez; en cambio cuando son casos jurídicos de luchadores sociales, los procesos tardan más de dos años en emitir sentencia, tiempo en el que las fiscalías actúan con dolo para prolongar el proceso judicial. Eso habla de desigualdad y que la ley burguesa está hecha para proteger a hombres y mujeres del régimen que salvaguardan los intereses de los grupos de poder económico y político.

Existen más de 400 casos de violencia política en razón de género, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el primer lugar lo ocupa Oaxaca con 144 casos registrados, después Veracruz con 46, le sigue Tabasco con 37, Campeche con 36, Chiapas con 27, Guanajuato con 24 y Puebla con 22, todos han sido denunciados por violencia política contra las mujeres en razones de género, nada más que las mujeres que se dicen ofendidas son funcionarias públicas o políticos de oficio y en consecuencia, la interpretación de la ley está hecha a modo y es aplicada con fines represivos.

En mayo de 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña hizo que un ciudadano pidiera disculpas

públicas por un altercado que tuvo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en la sala VIP de la tarjeta American Express, con el licenciado Carlos Velázquez de León en 2024.

El senador señaló que fue agredido física y verbalmente, consideró que le faltaron al respeto e insultaron la investidura que representaba en ese momento. Presentó una demanda en contra del ciudadano ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso de conciliación el Lic. Carlos propuso ofrecer una disculpa por escrito, la cual fue rechazada por el senador Noroña, le propuso presentarse a la sala de la mesa directiva del Senado el 19 de mayo de 2025 para presentar ahí una disculpa pública con personal de la FGR como testigo. Las cámaras del canal transmitieron en vivo el acto, que tiene connotación feudal, por lo tanto, reaccionaria.

El senador Noroña podrá jactarse de ser un “luchador social de larga trayectoria”, sin embargo, su proceder es autoritario, su concepción ideológica resulta reaccionaria, no se le puede tocar ni con el pétalo de una opinión ciudadana, se le olvida que como senador está expuesto a recibir todo tipo de opiniones y críticas, si no va a aguantar ¿Para qué se mete al ruedo de los toros?

El columnista Héctor De Mauleón, el 1 de mayo de 2025 publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, donde abordó los presuntos vínculos entre Tania Contreras López, entonces candidata y hoy magistrada electa del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con redes de corrupción y contrabando de combustibles en esa entidad.

La candidata presentó denuncia ante el Instituto Electoral de Tamaulipas por los delitos de calumnia y violencia política contra las mujeres en razón de género. El instituto dictó medidas cautelares en las que ordenó a El Universal retirar la columna de Mauleón. El diario en defensa del columnista y de la libertad de expresión, se negó a bajar la columna. Más tarde se impuso una multa, además de la obligación de publicar una disculpa y la inscripción de ambos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en

Razones de Género por un período de cuatro años.

Una coincidencia más, se actúa como integrante de una corte feudal contra un trabajador de la comunicación; diría el pueblo: Dios nos agarre confesados, porque hoy la demandante es integrante del Poder Judicial y por sus antecedentes aplicará a rajatabla el estado de derecho burgués contra el pueblo trabajador y quien ejerza una opinión crítica a su función.

En la campaña electoral de 2024 la ciudadana Karla María Estrella publicó en su cuenta de X un mensaje que cuestionaba las circunstancias en las que la entonces candidata federal del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, obtuvo la candidatura. La diputada presentó una denuncia en el INE que llegó a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que consideró un acto de posible violencia política de género, porque según la agraviada el mensaje descalificaba su carrera política al insinuar que su candidatura sólo se debía a la intervención caprichosa de su marido quien también es diputado.

La Sala Regional condenó a Karla María Estrella a pagar una multa económica, a ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un período de 18 meses y a publicar por 30 días naturales en la misma red social una disculpa conforme al texto redactado en la propia sentencia: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudico tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

La realidad es cruda y se nos presenta tal cual es, al paso del tiempo ha quedado demostrado que el político de oficio es producto de las maquinaciones de su esposo y el grupo de poder al que pertenece, ¿cómo sancionar jurídicamente semejante acto? Lo real en este caso y dentro de la política burguesa, es que la susodicha hoy está en la política porque

es apadrinada tanto por su esposo como por el grupo político al que pertenece ¿cómo describir esta realidad para no herir susceptibilidades?

Todo político burgués llega al cargo por ser funcional a los intereses de la clase explotadora, por intereses económicos, por relaciones de compadrazgo, por la compra de voluntades, actos de corrupción o la protección a quienes lo cometen, por su actitud servil al régimen y al capital, independientemente de su sexo.

El 10 de agosto del presente año, los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por orden del Tribunal Electoral del Estado (TEEE), el cual consideró que las expresiones emitidas en su programa de análisis en redes sociales constituyeron violencia política por razón de género, en su modalidad digital y mediática.

Los tres difundieron un video en la plataforma La Barra Noticias, un dictado por la autoridad: “Se ofrece una disculpa a la gobernadora Constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones emitidas en un programa de You Tube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

Otro periodista de la misma entidad, Jorge Luis González Valdés y al diario Tribuna Campeche, el mismo tribunal ordenó abstenerse de realizar cualquier referencia a Sansores San Román, no puede hacer ninguna mención de su persona ni de su gobierno, además de designarle un interventor que revise previamente todos los contenidos del medio antes de su publicación; con ello buscan contener cualquier señalamiento crítico contra el gobierno de Campeche y de quien funge como representante del Ejecutivo estatal.

El proceder del gobierno de Campeche es autoritario, rebela que la política de gobierno esta fincada en una concepción reaccionaria que castiga con medidas de censura, lo cual anula de facto derechos constitucionales.

El Tribunal electoral del estado de Guerrero sancionó al periodista Jesús Castañeda y el medio que dirige, Acapulco Trends, por la investigación sobre el uso irregular de 898 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la actual administración municipal. La investigación difundida en el medio digital señala que el desvío estaría vinculado al manejo de recursos tras el paso del huracán Otis en 2023.

El tribunal determinó que el medio digital incurrió en violencia política de género en agravio de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, por lo que tuvo que pedir una disculpa pública durante 15 días y pagar una multa superior a los 22 mil pesos.

La sentencia del tribunal determinó que, algunas de las expresiones difundidas en redes sociales excedían los límites del ejercicio periodístico y constituían actos que “limitan, anulan y menoscaban los derechos político-electorales” de la alcaldesa por su condición de mujer. Además, se ordenó la inscripción del periodista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un período de un año y seis meses.

En Oaxaca, el periodista Alejandro López, director del portal Nuevo Siglo Noticias, por difundir la denuncia de una ciudadana contra el Registro Civil de Nochistlán por cobrarle 3 mil 500 pesos por emitir su Clave Única de Registro de Población (CURP) -cuyo trámite es gratuito-, la Vicefiscalía de Huajuapán de León le impuso medidas restrictivas a modo de silenciarlo, así como a su portal de noticias. Las medidas de restricción prohíben al periodista Alejandro publicar o comentar sobre la denunciante y ofendido, sin que exista Carpeta de Investigación.

En todos los casos existe abuso de autoridad, quienes interponen la demanda son en su mayoría mujeres políticos de oficio que ocupan un cargo público en las instituciones gubernamentales, ya sea como diputadas, senadoras, gobernadoras o integrantes del Poder Judicial, desde el cargo político que representan utilizan el aparato ideológico, jurídico y represivo para criminalizar y judicializar la crítica bienintencionada con la intención de

silenciar voces y conciencias críticas.

En los casos señalados, el hecho de obligar a las personas a presentar disculpas públicas en una institución pública habla de la soberbia de los funcionarios y la humillación hacia el que ofrece la disculpa, el hecho en sí habla de un acto represivo que castiga vía judicial con multas económicas, ignominia pública o retractarse de su forma de pensar y agregar su nombre a una lista de personas sancionadas en materia de violencia.

En todos los casos se utiliza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de los estados como instrumento político-jurídico para anular de facto los derechos de la libertad de pensamiento o expresión de ideas y la crítica política; la interpretación dolosa lleva implícitos actos autoritarios propios de la nobleza feudal.

Los ejemplos exponen la contradicción en el discurso que se emite desde Palacio Nacional, desde ahí argumentan que es falso que la administración actual coarte la libertad de expresión y sea autoritaria, pero permite que en los estados donde gobierna Morena o políticos de oficio militantes de su partido lo hagan de manera cínica y dolosa.

Lo que refleja que es política de gobierno judicializar la crítica política, un hecho que deja en evidencia que se imponen medidas autoritarias contra trabajadores de la comunicación y ciudadanos que opinan sobre la política institucional; eso es un paso de lo que en gobiernos fascistas aplicaban contra aquellos que no se plegaban a sus designios.

Hoy la represión la disfrazan de violencia política por razones de género, mañana cualquier ciudadano que emita una opinión crítica será señalado por traición a la patria, ambos son la expresión de una política de gobierno que impuso un partido político electoral bajo el amparo de la transformación en el país. Con ese proceder de funcionarios y políticos de oficio se abre la puerta hacia un régimen profascista.

PDPR-EPR

PARAMILITARISMO CON DISFRAZ REVOLUCIONARIO EN MICHOACÁN

El paramilitarismo en la actualidad ha adquirido numerosos matices para mimetizarse en el entorno social y desde diversas perspectivas cumplir sus objetivos que van desde la justificación de la militarización de la vida económica, política y social del país, hasta el despliegue de tácticas contrainsurgentes. La existencia de grupos paramilitares y parapolicíacos en esta entidad es basta y obedece a una estrategia general contrainsurgente y de protección de intereses económicos y políticos oligárquicos.

En el país la actuación de los grupos paramilitares encubiertos con ropaje de cárteles del narcotráfico data de la década de 1970 del siglo pasado, fue puesta en marcha esta táctica contrainsurgente para combatir a los grupos guerrilleros de aquel entonces, en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas donde había fuerte presencia de organizaciones revolucionarias, se utilizó a los grupos paramilitares para combatir a “la guerrilla”, militar y socialmente.

Militarmente el Estado se apoyó en dichos grupos que bajo el mando directo del ejército mexicano trataron de abatir a los guerrilleros, socialmente se utilizó la producción, tráfico y distribución de estupefacientes para descomponer y podrir la base social con potencial de convertirse en base política de la revolución. En la década de 1980, se empezó a generalizar y diseminar por todo el país la práctica de los grupos paramilitares encubiertos con la denominación genérica de cárteles.

En Michoacán operan grupos paramilitares bajo esta denominación desde la década del 80 del siglo pasado, la región de la Depresión del Balsas, Tierra Caliente y la Costa fueron el principal teatro de operaciones de estos grupos, desde entonces, su creación, adiestramiento, abastecimiento y operación dependía directamente del Ejército mexicano, quien a su vez seguía puntualmente el guion de la estrategia general contrainsurgente formulada desde el imperialismo estadounidense.

En la década de 1990 se expandieron a otras regiones del estado y el negocio de la producción de mariguana, tráfico y distribución de ésta y otros enervantes floreció al amparo de políticos de oficio, generales del Ejército mexicano y comandantes de diversas corporaciones policiacas, con la aquiescencia del Estado burgués mexicano. De tal manera que el argumento del combate al “narcotráfico” se usó con fines contrainsurgentes, económicos y políticos.

Estos grupos paramilitares desde siempre han tenido origen y patente de Estado, es falso que sean imbatibles, que hayan infiltrado a los gobiernos e instituciones de seguridad, son creación del Estado y sus instituciones militares y policiacas; obedecen a intereses de clase bien definidos, son los verdugos del pueblo, su misión consiste en propalar la descomposición, sembrar el terror, justificar la militarización y encubrir los más atroces crímenes de Estado. Están adiestrados en las tácticas de contrainsurgencia que se imparten desde los centros militares del

imperialismo.

Iniciado este siglo, el paramilitarismo adquirió otros matices, acorde a las necesidades del sistema capitalista, las recurrentes crisis económicas cíclicas han venido aparejadas de la proliferación de grupos paramilitares que con toda impunidad operan al servicio del capital, cambian de careta para confundir y engañar a los incautos.

Para el año 2000, el puerto de Lázaro Cárdenas ya era de los más importantes en la circulación de mercancías provenientes de Asia Central con destino a Estados Unidos a través de las vías férreas que conectan este puerto con el sur de dicho país, se convirtió en un puerto estratégico porque también por él se intensificó el saqueo de los recursos mineros de Michoacán. Al mismo tiempo surgieron grupos paramilitares que ofrecieron sus “servicios” de “seguridad” y “protección” empresarial.

Así empezó a adquirir renombre “La Empresa”, grupo paramilitar que después se convirtió en “La Familia Michoacana” y posteriormente en “Los Caballeros Templarios”, bajo estas denominaciones se ejerció la violencia ilegal de Estado, se convirtieron en práctica común las masacres, ejecuciones, decapitaciones, desapariciones forzadas, la tortura, los desplazamientos forzados, el saqueo de los recursos mineros, el despojo de tierras, huertas de limón y aguacate, deforestación de los bosques..., es decir, tras el velo de estos grupos paramilitares se operó un intenso proceso de acumulación originaria de capital en Michoacán.

En el 2013 surge una nueva modalidad de los grupos paramilitares, ahora enfundados en ropaje de “autodefensas”, bajo las banderas del pacifismo armado se presentaron como gente del pueblo bien intencionada que estaba harta del “cobro de piso”, de las extorsiones, la violencia, el saqueo...; los monopolios de la comunicación

en lo inmediato los elevaron a justicieros sociales y los promovieron masivamente como los “modernos Pancho Villa”. Pronto quedó evidenciado que el artífice de este proyecto paramilitar fue el general colombiano Oscar Naranjo contratado por Enrique Peña Nieto como asesor en seguridad.

Estos grupos de “autodefensas” fueron nutridos por paramilitares excluidos del botín, con nuevos paramilitares y con los llamados “Caballeros arrepentidos” que se pasaron en masa a las filas de los autodefensas, así los más sanguinarios criminales quedaron purificados bajo la playera blanca de los autodefensas, que capitaneados por el Ejército mexicano “derrotaron” y desplazaron a Los Templarios, en un juego perverso donde corrió sangre del pueblo inerte, se justificaron más despojos, desplazamientos, desapariciones y todo tipo de crímenes y atrocidades por encargo de Estado.

Los llamados “cuatro letras”, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), emergieron como el nuevo esperpento paramilitar que una vez más, en nombre la “la seguridad” y la “paz”, continuaron ejerciendo la violencia ilegal de Estado, las lacras que dijeron combatir son las mismas que le dieron vida, las razones de su existencia son también de Estado. Este grupo paramilitar también es de manufactura del Ejército mexicano.

Más pronto que tarde surgieron nuevas contradicciones en el seno de los paramilitares por el reparto otra vez del botín, y es que, el “cobro de piso”, el “cobro por protección”, “cobro por circular” y demás extorsiones, genera dividendos económicos millonarios, y constituye uno de los instrumentos generadores de zozobra para subyugar al pueblo. En el marco de este contexto de disputa por el reparto del botín, se encuentran “en guerra” los llamados Cárteles Unidos con el CJNG, entre otros de menor renombre, pero de la misma estirpe, de tal manera que, el pueblo

michoacano está sometido a un permanente estado de violencia paramilitar.

El arribo de Morena a la administración pública generó expectativas positivas en el pueblo michoacano, pero pronto quedó claro que en cuanto a seguridad pública se refiere, continuó más de lo mismo, como de costumbre solo operó un reacomodo en estos grupos, que no han dejado de fortificarse y seguirán su propagación, en tanto que, la “estrategia de seguridad” de Morena es la misma con la que se rigieron gobiernos panistas y priistas, es decir, se sustenta en la contrainsurgencia y los postulados de la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de EE. UU. impuesta a nivel global como panacea y el padre nuestro a seguir por los países dependientes del imperialismo estadounidense.

Los gobiernos de Morena se han esforzado en modificar la percepción de la realidad, a través del manejo tendencioso de las cifras y estadísticas generadas a modo, sin embargo, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, los desplazamientos forzados, el despojo, el saqueo, la violencia contra el pueblo... no ha parado, por el contrario, continúa creciendo, sobre todo, en regiones ricas en recursos naturales de todo tipo o de ubicación estratégica.

En el marco de este contexto, el pasado 25 de julio del presente año, en un video a través de redes sociales, se dio a conocer un supuesto Ejército Purépecha de Libertad Michoacana, que dice ser un “movimiento social y revolucionario” surgido del hartazgo social, ante la extorsión, el cobro de cuotas, el secuestro, la inseguridad... entre otros alegatos que rayan en barata retórica pendenciera.

Se presentan como revolucionarios y en desparpajadas declaraciones vierten amenazas y un ultimátum al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, que no pasa de la trillada cantaleta de:

“...preferimos que ustedes el Estado, tomen la seguridad en nuestra región... pero si no lo hacen, lo haremos nosotros...”. ¡vaya! Que sapiencia, ningún ejército revolucionario por incapaz que sea plantea semejante estupidez.

Dicho video no pasó desapercibido para la prensa nacional, fue difundido y se tipificó el hecho como “el surgimiento” de un nuevo ejército revolucionario, dándole voz a los supuestos insurrectos. No obstante, los esfuerzos mediáticos por proyectar esta idea no han trascendido más allá de los círculos del amarillismo político y el morbo en las redes sociales. Desde luego, no faltan las voces y plumas que le han conferido por lo menos el beneficio de la duda.

Pero veamos ¿Es realmente un ejército de purépechas? ¿Es una expresión genuina del pueblo michoacano? ¿Son un grupo revolucionario? No tienen ni un ápice de revolucionarios, no son un ejército de purépechas, ni mucho menos una expresión genuina del pueblo michoacano, son paramilitares con disfraz de revolucionarios que por enésima ocasión en nombre de la “inseguridad”, la “ingobernabilidad” y la “paz” social pretenden justificar su actuación criminal de Estado, ahora enfundados en un discurso indigenista falsamente revolucionario, como ya se intentó en el estado de Chiapas.

Su vulgar narrativa es un mediocre esfuerzo por hacerse pasar como revolucionarios, pero su esencia y naturaleza paramilitar proimperialista los pone en evidencia. Muy orgulloso el que se dice ser “Comandante Arango” le da las gracias a su “excelentísimo presidente de los Estados Unidos Donald Trump” “por apoyar a nuestra patria”, y presume que “recientemente” fueron “escuchados” por el gobierno de Estados Unidos, a través “del Departamento de Estado y de Justicia”, quienes los “atendieron” y les “dieron la mano”... su gran acto revolucionario consistió en entregar un “expediente” que contiene “los

nombres, los rostros, los vehículos, las cuentas, los pactos... las pruebas..." de la colusión del gobierno con los grupos "criminales", entre otras veleidades.

Es ampliamente conocido por el pueblo que los grupos paramilitares operan junto a los policías de todo tipo, sin el apoyo policíaco y militar no son nada, sin embargo, ¿Qué revolucionario podría confiar en el gobierno estadounidense y concretamente en su departamento de justicia? Ninguno por ingenuo que estuviera. En tiempos actuales de predominio capitalista e injerencia imperialista, todo revolucionario que realmente lo sea, tiene la claridad política de derrocar al Estado burgués existente y la firme convicción de ser antiimperialista. Por lo que las sandeces de dicho sujeto apátrida revelan con claridad origen, carácter y a qué intereses sirve el supuesto ejército purépecha.

¿En qué cabeza cabe la idea de referirse a Trump como nuestro excelentísimo presidente de los Estados Unidos? Solo en la de un estadounidense reaccionario y pro fascista, los agentes del imperialismo y los traidores a la patria que se venden por unos míseros dólares y ansían ser colonia estadounidense. A confesión de parte relevo de pruebas, hasta el más incauto puede advertir que se trata de una ridícula faramalla que tiene como propósito fortalecer la fatídica idea del Estado fallido, bajo el supuesto del Narco Estado, con la que pretenden justificar la invasión estadounidense.

La retórica barata del supuesto "Comandante Arango" del ejército purépecha ha lanzado la amenaza de que "La historia se repetirá este 15 de septiembre...", "el 15 de septiembre Michoacán será historia, y se estremecerá México completo..." todo indica que se trata de una chabacanería pendenciera, sin embargo, encierra la posibilidad de que de nueva cuenta en Michoacán se ponga en marcha una operación

paramilitar a gran escala orquestada directamente por generales proimperialistas del ejército. La reedición del paramilitarismo ahora con careta de revolucionarios es burda maniobra que tiene como propósito confundir y engañar al pueblo y justificar la injerencia e intervencionismo imperialista.

No es casual que, en septiembre, mes de la Patria, el imperialismo yanqui arrecie su ofensiva injerencista contra el pueblo de México a través de diferentes instrumentos de dominación, que tienen como propósito apretar más los grilletes del sometimiento. Por lo que las arengas de dicho sujeto en nombre de los purépechas revelan a qué intereses sirve este grupo paramilitar.

Es una realidad que existen las extorciones, los desplazamientos forzados, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, corrupción y la violencia que emana de los grupos paramilitares que operan al amparo de sus creadores y protectores, el ejército y las instituciones policíacas, cierto es que, las víctimas del paramilitarismo son el pueblo, sobre todo el que no está organizado, pero también cierto es que la violencia que azota al pueblo es inherente al capitalismo.

Claro que existe la necesidad política de una revolución social anticapitalista, pero ésta no la harán los grupos paramilitares que propalan el terrorismo de Estado y son un apéndice del aparato policíaco militar, la revolución en México ha de ser obra de las masas populares organizadas en un auténtico ejército popular revolucionario que, al mismo tiempo que avanza en la destrucción del poder burgués va construyendo el poder proletario, es decir, el poder del pueblo y para el pueblo.

PDPR-EPR

REVOLUCIÓN A DEBATE



RUMBO AL ABISMO DE LA CRISIS



El entorno convulso por el que transita el mundo se agrava por el accionar del imperialismo. El belicismo con el que empuja sus aspiraciones neocoloniales cubre con el horror de la guerra a más regiones del mundo, ahora amenaza con mayor descaro al pueblo venezolano, por medio del despliegue y concentración de fuerza militar en franca intensión ofensiva pretende amedrentar a la revolución bolivariana y consumir aviesos planes injerencistas.

El principal instigador de la guerra e intervención sobre la libre determinación de los pueblos es el imperialismo yanqui. El genocidio del cual es víctima el pueblo palestino lo alimenta Estados Unidos de América (EUA); el mismo buitres imperial sostiene al régimen neofascista de Zelensky; Irán fue bombardeado con las bombas norteamericanas; el

mismo monstruo somete al pueblo cubano al bloqueo económico más criminal de la historia contemporánea; y, con la misma maquinaria de guerra con la que ha destruido a pueblos enteros amenaza a Venezuela.

Los acontecimientos belicistas que sacuden al mundo reafirman que el imperialismo es el enemigo número uno de la humanidad, del mismo modo, ponen de manifiesto a la nación imperialista que personifica a dicho monstruo. Es EUA la cabeza del imperialismo, junto con sus socios del G-7, que a través de la OTAN como instrumento militar, constituye el conjunto de naciones opresoras que imponen la ley de los monopolios y clanes oligarcas sobre los pueblos oprimidos.

Es el mismo grupo de oligarcas que desde antaño apretuja a la humanidad sobre el filo del exterminio. Los intereses del



La oligarquía alimenta la carrera belicista que amenaza a la humanidad al filo del exterminio

capital monopolista por los que guerrea el imperialismo y personifican dichos oligarcas, arrastran al género humano a un espiral de violencia que amenaza con devorar a pueblos enteros.

La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y por la democracia son un embuste imperialista, meros pretextos para disfrazar el intervencionismo belicoso e imponer un orden mundial que perpetúe al capitalismo en su fase superior. El capitalismo no puede auto combatir sus propios engendros y lacras inherentes, dado que el capitalismo es el mundo de las mercancías, le es intrínseco el narcotráfico; puesto que, en el capitalismo reina el monopolio de la propiedad burguesa y gira entorno a la apropiación de la plusvalía transfigurada en ganancia capitalista, no reina la democracia pura, lo que

existe es la dictadura del capital; y, del mismo modo sucede con la supuesta lucha contra el terrorismo, ya que, el único que genera terror para sostener por medio de la violencia un régimen caduco, es el Estado burgués, máxime de aquellas naciones imperialistas.

Las contradicciones intrínsecas del imperialismo que lo conducen al abismo de las reliquias de la historia maduran y con ellas la guerra que lo ha de consumir. El imperialismo lo sabe, por ello se inquieta y reacciona virulento encubierto de sarcasmo respecto a la demostración de fuerza militar y económica realizada por China y las naciones que se

denominan el sur global.

El desfile militar presentado por China contiene un mensaje contundente contra las tentativas fascistas y militaristas del imperialismo. Deja en claro que la única forma efectiva para garantizar la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos es, la unidad de todo un pueblo junto a sus órganos de poder desarrollados en fuerza militar.

Los resultados de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) reflejan la fortaleza económica de China y sus aliados, al mismo tiempo, estampan que esa cualidad no la tiene el imperialismo. Mientras el imperialismo en su conjunto se bate en el filo de la recesión económica, los pueblos del mundo que se agrupan en los BRICS y la OCS se enfilan en la ruta de mayor crecimiento y desarrollo económico, por ello, el imperialismo se empecina en frenar o descarrilar dicho ejemplo de rompimiento de la hegemonía imperialista, hasta ahora la guerra comercial es el vehículo principal del sabotaje imperialista, no obstante, al ver infructuoso su esfuerzo, deja asomar de más en más sus garras belicistas.

En suma, a un cuarto del siglo XXI, las contradicciones que convulsionan al mundo entero se encuentran vivas y tienden a exacerbarse, con ello, la reconfiguración de mundo unipolar a multipolar en curso adquiere mayor definición en sus



campos contrarios.

La dictadura del capital pisa fuerte a la humanidad, lo hace cada vez más feroz en relación directa a la putrefacción del régimen burgués. México es ejemplo concreto de ese desenlace, es notorio que, a medida de la putrefacción del sistema político y la agudización de las contradicciones del modo de producción, los tiranos endurecen la opresión y explotación capitalista.

Por mucho que vocifere del progreso económico en México la junta administradora de los intereses de la burguesía, no puede ocultar la condición real de las relaciones económicas que subsumen al pueblo en condición de esclavitud moderna. Hoy como en las administraciones anteriores, las masas populares no trabajan para vivir, viven para trabajar; mientras el proletario es el que produce, el burgués es quien se apropia el producto del trabajo; y, mientras, las masas populares se hunden más en el pantano de la pauperización social, los burgueses concentran y centralizan mayor poder en sus manos.

El informe presentado por el representante del Ejecutivo federal se estrella ante una realidad ajena a los parámetros presentados como medición de éxito. Las estadísticas presentadas contienen sesgo demagógico, son interpretadas a modo sin la conexión del conjunto y ocultan la esencia de las relaciones de

explotación económica; por ejemplo, en la medición de la pobreza, el gobierno mexicano cacarea haberla disminuido, cuando en realidad las masas populares son cada vez más pobres en relación a los explotadores y opresores.

Mientras el pueblo padece las consecuencias de las relaciones de explotación, los opresores brindan por sus éxitos de cancerberos del capital y propalan mentiras para engañar al pueblo. Para la administración en turno no cuentan ni son motivo de mención los detenidos desaparecidos de manera forzada, en este rubro de terror de Estado, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum destaca por ser el sexenio donde más desapariciones forzadas se perpetran en la historia de México.

Para la que tiene investidura de presidente de la república todo va bien, significa entonces que, es correcto la existencia de 46 millones de mexicanos en condición de no poder adquirir la canasta alimentaria, que el 64% de la población no pueda adquirir los suficientes medios de vida y que más de nueve millones viven en la incertidumbre de no saber si tendrá que comer para el día siguiente.

El capitalismo en México se perfila a una crisis de magna profundidad. El hecho que la economía se encuentre estancada habla de ello, nada tienen por celebrar en ese rubro los cancerberos del capital, menos aún, en el terreno de la soberanía nacional, puesto que, el carácter dependiente de la economía mexicana respecto al extranjero crece a ritmo acelerado en la presente administración federal.

En fin, el mundo y la nación transitan por la ruta de la agudización de las contradicciones antagónicas y no antagónicas intrínsecas al imperialismo. En ese entorno, tanto explotadores como opresores reaccionan por la defensa de sus mezquinos intereses sin importar la desgracia en la que se encuentran las masas trabajadoras.

PDPR-EPR

**PENSAMIENTO DEL
MILITANTE
COMUNISTA**



**NUESTRA
ACTIVIDAD
REVOLUCIONARIA**

Duermo, me levanto, actividad cotidiana, trabajo político, problemas, soluciones, la cotidianidad procurando la transformación personal, revolucionaria.

De la actividad política caótica, la aspiración a la militancia, ahora con las responsabilidades de conocer al PDPR-EPR y cumplir tareas político militares, dentro de eso, la preparación continua, la lucha interna contra los vicios burgueses, el error y la corrección.

Dentro de mis tareas, pocas o muchas, importantes todas, soy convocado a una escuela político militar de mi PDPR-EPR, una sorpresa, si bien tenía cierto conocimiento sobre estas actividades, nunca me había tocado participar, con algo prisa terminé mis pendientes y llegué a la cita acordada.

Por los acontecimientos que vivimos, las contradicciones que se agudizan y el panorama político, los análisis personales y colectivos, se percibe una ofensiva del Estado, se ve que están deseosos de acabarnos, el Estado, sus personeros. Una ofensiva, que, si ponemos atención, puede que ya esté en curso.

Toca redoblar esfuerzos, salí de la selva de asfalto para llegar a una desconocida, más grande, seguimos caminando con otros camaradas -¡ta', esto ta cabrón!, pero queríamos andar en serio- dice un camarada efusivo, con grandes gotas de sudor en la frente.

-Más cabrón está si no nos preparamos, dicen que la Guardia y los guachos están perros- replica otro camarada.

-Pero no tienen la voluntad de combatir, por eso hay que prepararnos- respondió nuestra guía, una camarada que parecía no detenerla nada por los caminos escabrosos que atravesamos.

Al llegar, después de largo tiempo, me sorprendió de lo que era testigo, camaradas, dispuestos al combate, disciplina, voluntad de lucha, camaradería. Desde el inicio nos transmitieron las normas, la disciplina, el carácter de nuestra escuela político militar, nos encontrábamos en el *Curso de marxismo para combatientes por el ideal comunista*.

Entonamos nuestros himnos, como una sola voz, con nuestros camaradas entonamos el himno nacional mexicano, con un gran contenido y significado antimperialista.

Las actividades se desarrollaron de manera intensa, el estudio nos permitió conocer y analizar muchas cosas de la realidad, tanto de nuestro trabajo político como de la vida personal, que entendí que era uno solo, la relación dialéctica, enseñar con el ejemplo.

Algunos camaradas se les dificultaban algunas cosas, de las que de seguro no están acostumbrados en

su casa, pero al final todos comprendemos la necesidad de seguir la disciplina y la solidaridad.

Un camarada comentaba que algunas palabras se dificultaban, pero siempre nos daban la explicación necesaria, como dirían los camaradas “unos me quedaron en la cabeza”, “hay que estudiar más”, al igual que el entrenamiento militar, que aunque al inicio se dificulte, primero tengo que aprender.

Para algunos era nuestra primera actividad de este tipo, nunca habíamos entrado a una escuela político militar, al inicio debimos acostumbrarnos a las maniobras de combate. En la plática entre todos los camaradas daban sus opiniones:

- Desde que nos informaron de nuestra convocatoria, estaba ilusionado, somos varios los que vamos a ir a la escuela político militar, es mi voluntad de venir a aprender y estudiar, son cosas que no he visto, sí entendí, de nuestro PDPR-EPR, eso quiero conocer más, hacer las tareas revolucionarias, aprender la autodefensa armada, enfrentar al enemigo y defendernos, entendí cómo se hace, lo del estudio del materialismo histórico, quiero conocer qué sucede en nuestro mundo, como es el burgués, cómo nos explota, por qué existe la explotación y opresión, por qué luchamos contra un Estado al servicio de los oligarcas, luchamos porque se acabe la injusticia y la desigualdad.

Quiero aprender más del entrenamiento, y a resolver las cosas en conjunto, entre camaradas, resolver la comida, cuidarnos, levantarnos temprano.

Otro camarada refería su experiencia:

- Yo fui seleccionado para este curso, tengo que cumplir el llamado de mi partido, porque somos parte de la colectividad, aunque hay cosas que se nos dificulta lo tengo que hacer para aprender cada día más. Las tareas son parte de la disciplina, nunca pasé hambre, resolvimos las cosas siempre juntos.

De vez en cuando entre camaradas preguntábamos sobre lo que veíamos en el estudio, otros camaradas relataban:

- Se me dificultó un poco al inicio, sobre el estudio del materialismo histórico y nuestro partido, algunas cosas se me grabaron en la mente, pero pasaron los días y mejoramos.

Lo que vimos fueron temas sobre el materialismo dialéctico, el origen del hombre, cómo surgimos como fuerza revolucionaria, las explicaciones nos ayudan a entender temas que no habíamos visto.

Conocer sobre los estatutos del PDPR-EPR es muy importante, si somos militantes de partido y combatientes de nuestro ejército nos debemos regir por principios, debemos asumir un compromiso, los que estamos aquí tenemos responsabilidades, hago el mayor esfuerzo por las tareas que nos toca realizar.

Todos aprendemos aquí, nadie es perfecto, los primeros días se me dificultó, cometí pequeñas fallas de logística, me autocritico por eso, pero en la convivencia aprendemos, entre todos, eso es importante, que estemos todos aquí, más adelante nos pueden tocar otras tareas y la debemos asumir.

Esperamos que no sea el primer ni el último curso, de mi parte he hecho un compromiso con nuestro PDPR-EPR, estoy como profesional de la revolución, aquí la cosa es seria, el que esté

debe estar convencido y consciente de la transformación, que debemos empezar por nosotros mismos, sigo con ese esfuerzo, pero en el proceso del camino se aprende, a relacionarnos con los camaradas, a resolver las dificultades, a combatir al enemigo, es un conocimiento que adquirimos, no en cualquier lugar, por eso es importante que estemos aquí.

Cada uno de nosotros hace un compromiso, tenemos derecho de seguir aquí y avanzar, apoyarnos entre todos los camaradas, a lo mejor se siente que son muchas las responsabilidades, pero siempre en colectividad podemos sacar las tareas.

Reflexiones que en distintos tiempos se hacían, que entre nosotros nos compartíamos, nos moralizábamos y conocíamos en el trabajo político, como revolucionarios.

Entre camaradas nunca nos faltamos al respeto, nuestra convivencia es sana entre nosotros, en la cotidianidad burguesa no es así, siempre hay alguien que se quiere aprovechar o humillar; aquí no, eso ya es parte de una verdadera transformación revolucionaria.

Todas las opiniones aportan algo, el centralismo democrático implica la participación de todos, la reflexión colectiva, el aprendizaje mutuo, la jefatura nos explica:

- Existe disposición y voluntad, se está convencido de la necesidad de la revolución socialista en México, las cosas se entienden, ustedes son capaces de conocer la realidad y transformarla, cuando la comprendemos empezamos a tomar decisiones más claras, con fervor revolucionario, que no debe extinguirse nunca en nosotros, en todo momento debemos vernos como camaradas, mantener la unidad, porque sabemos que la realidad hay que cambiarla, que las cosas no están bien, están mal y hay que transformarlas.

Hay que continuar y siempre hay que avanzar, un error sería quedarse estancado, vivir lo que otros vivieron, cometer los errores que otros cometieron, hay que aprender de eso; el mundo espera por nosotros, mucho aprendizaje, para poder cambiarlo necesitamos estar organizados, con objetivos claros, conocer lo más que se pueda y empezar el proceso de transformación.

Hay cosas que cuando son fuerza de la costumbre son difíciles de cambiar, pero si existe voluntad de cambio, nos transformamos, todo podemos aprender y todos podemos enseñar, aquí nadie es el gran sabio. De aquí en unos años realizaremos las tareas juntos, que nuestras colectividades avancen y nunca nos estanquemos.

Pasaron los días, no se sentían, siempre había algo que hacer:

- Me da gusto que estemos aquí, a veces nos toca otras tareas, para poder cumplir se necesita esfuerzo, el trabajo en conjunto, esfuerzos de muchos camaradas en distintas instancias para realizarlo. A pesar de que parezca difícil, todos ponían atención y preguntaban, se ve que se hace el esfuerzo.

Somos comunistas, queremos el cambio y la transformación hay que empezar en nosotros mismos, ser sujetos de transformación, donde sea que nos toque estar. Siempre hay que empezar por algo, es la experiencia revolucionaria, tener claro que somos convocados a la escuela político militar, todos somos parte del PDPR-EPR, somos muchas generaciones, algunas nacieron aquí en la lucha y otras se incorporan a la lucha revolucionaria.

Con dificultad, así empezamos todos, a lo mejor nos tocó vivir otras experiencias y dinámicas, desde jóvenes nos tocó participar y vaya que han pasado los años, es un deber seguir en la lucha, está es nuestra existencia, nuestro ser social, y si es eso, aquí vamos a encontrar felicidad, en cada tarea que nos realiza como sujeto revolucionario.

Juntos gozamos los éxitos que tengamos, vamos a tener sin sabores cuando las cosas no salgan bien, lo que se trata es avanzar en la preparación político militar, todas las generaciones, no cometer los errores que cometimos en la lucha producto de la ignorancia, siempre trabajar para resolver los problemas.

Ahora está más claro nuestro papel, sin dudas afirmamos que somos revolucionarios, militantes por el ideal comunista, que nuestra participación es consciente, una experiencia interiorizada donde hacemos nuestros los principios de la revolución, de nuestro PDPR-EPR, sin importar la circunstancia individual.

Pareciera que los días no alcanzan, diría un compa -no da tiempo de andar pensando chingaderas-, no andar de ociosos diría yo. Tomar la bandera del partido significa que todos, hombres y mujeres debemos organizar a nuestro pueblo, estudiar y entrenar, aprender a defendernos del enemigo, aprender la técnica de combate, el uso del armamento popular.

Tengo claro que debemos asumirnos como revolucionarios, organizar a toda la juventud, ser militantes dispuestos a prepararnos en todo momento, desarrollar el trabajo con paciencia, sin desesperarnos, siempre con el ejemplo personal, es lo que va a permitir convencer a otros porque la descomposición avanza con mucha rapidez.

La sociedad burguesa está batida en mierda, se meten por arriba y por abajo chingadera y media, parte de la juventud está batido en esa mierda, las relaciones son depredadoras, llenas de violencia y vicios burgueses, eso en la sociedad capitalista es normal.

En esta escuela político militar hemos conocido la necesidad de la revolución, hay una necesidad de cambiar este mundo que es injusto, pero para que sea posible debemos cambiar nosotros.

Somos pueblo organizado y con conciencia revolucionaria, eso es el cambio, tenemos que comprender que tenemos que prepararnos todos los días. El primero momento de maduración implica conocer que ya crecimos, algunos son sujeto político y hoy hay que ser sujeto revolucionario.

Nos llevamos la claridad de que el mundo que vivimos lo podemos conocer y es necesario transformarlo en beneficio del pueblo trabajador, nosotros, hombres y mujeres jugamos un papel que tiene que ver con la transformación social.

Se terminó nuestra actividad político militar, entendemos que somos otros, que tenemos herramientas para trabajar de otra manera, que somos hijos del pueblo organizado, nos da mucho gusto que hoy estamos trabajando como camaradas, eso nos da más fuerzas para seguir en la lucha, no nos hemos equivocado, seguimos tomando las banderas que desde hace 60 años nuestros camaradas fundadores iniciaron.

PDPR-EPR

ANÁLISIS INTERNACIONAL

VIOLENCIA PARA RECOMPONER LA HEGEMONÍA ROTA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

Intento por recomponer la hegemonía norteamericana

La situación internacional sigue siendo convulsa, las principales contradicciones se dan en torno a la posición del gobierno norteamericano por tratar de recomponer su hegemonía resquebrajada e imponer sus intereses a los pueblos del mundo, de la otra parte, la resistencia de pueblos y gobiernos que crece día a día y se expresa en conflictos económicos, políticos e incluso militares.

La administración de Donald Trump ha pasado a la ofensiva política, diplomática y económica para tratar de recomponer su hegemonía resquebrajada, la guerra económica constituye parte nodal de su política de gobierno para imponer sus intereses.

La rusófoba alemana Úrsula von der Leyen terminó por sucumbir a las exigencias del imperialismo norteamericano, el resultado de las “negociaciones” entre la administración Trump y la Unión Europea (UE) favorecen ampliamente a los intereses monopolistas norteamericanos, la UE emerge aún más dependiente de la hegemonía norteamericana.

La UE es dependiente con respecto al imperialismo norteamericano en materia industrial, militar, combustibles y en defensa; su “socio” fija las reglas, éstas consisten en garantizar primero el desarrollo económico y la defensa de su seguridad

norteamericana antes que las de la UE. En esa ruta Alemania cede en su desarrollo industrial para que Estados Unidos lo remonte.

La política del gobierno norteamericano es puntual, se impone una mayor carga tributaria a los pueblos del mundo, a ella no escapan ni sus “socios” de la UE, lo determinante para el imperialismo norteamericano es poner a salvo sus intereses.

La UE bajo el acuerdo político-económico con la administración Trump resulta vasalla al aceptar 15% de aranceles a productos europeos en el mercado estadounidense y cero por ciento a los productos norteamericanos en el mercado europeo; la obligación de la UE de invertir 600 mil millones de dólares en la economía norteamericana; el compromiso de comprar 750 mil millones de dólares en “productos energéticos”, entre ellos el gas natural licuado, el cual resulta ser más caro que el ruso; y, el incremento al 5% en el gasto militar, al que hay que sumar la adquisición de equipo militar norteamericano.

El beneficiario directo es el capital monopolista transnacional de origen norteamericano; la UE afianza su condición de “socio” vasallo; el gobierno norteamericano avanza en la recomposición de su hegemonía resquebrajada con la guerra económica y la amenaza militar. Los perdedores lo constituyen los millones de ciudadanos europeos, que por su condición de clase son explotados y oprimidos,

sobre ellos se descargan todas las consecuencias nefastas, que de inmediato se expresa en el empeoramiento de su condición de existencia material.

Los compromisos económicos de la UE conllevan los políticos, uno de ellos, mantener a toda costa el régimen neofascista de Kiev, en ese rol el imperialismo norteamericano les da una concesión, pueden revender equipo militar de origen norteamericano para mantener la ofensiva de la OTAN vía Kiev contra Rusia. La política norteamericana se confirma en su estrategia contrainsurgente para tiempos modernos, hacer la guerra contra los pueblos del mundo a través de terceros para apuntalar la hegemonía económica, política y militar norteamericana.

La política intervencionista norteamericana cobra nuevos visos en América Latina al tender un cerco militar a Venezuela y declarar la intención de detener a los dirigentes legítimos del pueblo venezolano.

El despliegue militar indica una pretensión concreta, intervenir militarmente en Venezuela; la campaña mediática lleva implícito el objetivo de deslegitimar políticamente al gobierno legítimamente constituido en Venezuela; y, la campaña internacional de corte anticomunista tiene el propósito de legitimar la intervención militar para el derrocamiento del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

Constituye un absurdo tipificar a Maduro y otros líderes del pueblo venezolano como cabeza de narcotraficantes, con ello queda demostrada la verdadera intención, bajo el amparo del combate al narcotráfico se justifica cualquier intervención militar en el mundo, un argumento suprajurídico que se adjudica el gendarme mundial.

En ese marco de violencia imperialista resultan justas las medidas de defensa que el gobierno de Maduro ha tomado, armar al pueblo para hacer defensa antiimperialista y dejar de manifiesto la voluntad de combatir contra las intenciones del enemigo principal de la humanidad, el imperialismo

norteamericano.

El imperialismo norteamericano no enfrenta a “una camarilla de dictadores”, por el contrario, se enfrenta a todo un pueblo, que por las medidas tomadas por el gobierno legítimamente constituido es todo el pueblo venezolano armado. Queda de manifiesto que una posición antiimperialista no es de palabra sino de actos concretos.

Un gobernante que es ilegítimo nunca tendría capacidad de convocatoria para la defensa de la patria, en este caso Madura y sus camaradas en el primer día de la convocatoria se enlistaron voluntariamente 8 millones de venezolanos para enfrentar la amenaza imperialista; el gobierno bolivariano, si no tuviera una amplia base política que lo respaldara, no podría permanecer en el poder y mucho menos resistir la embestida imperialista.

La ofensiva sionista continúa

La campaña militar sionista que pretende exterminar al pueblo palestino y apropiarse de todo su territorio continúa, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra están a la orden del día, no se ocultan, por el contrario se hace apología de la violencia sionista.

Las operaciones militares israelíes contra territorio y población palestina están fuera de todo principio del derecho internacional; su proceder confirma su condición de Estado ocupante, por tanto, opresivo y criminal; su política de gobierno está fincada en el sionismo, que es igual a fascismo, en consecuencia, sus operaciones militares se han traducido en más de 60 mil víctimas de gazatíes; el cometido de crímenes de lesa humanidad y de guerra están al orden día, se agrega uno más como parte de la táctica militar, matar de hambre a los gazatíes, por la prohibición de la entrada de alimentos y medicinas la hambruna en Gaza ya es una realidad.

Un crimen contra la humanidad cometido a los ojos de ésta y documentado en vivo donde está probado el asesinato con miles de explosivos y munición de todo calibre de 18 mil 592 niños, 9

mil 782 mujeres y 4 mil 412 ancianos, víctimas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las víctimas enumeradas representan, según el ministerio de salud de Gaza a finales de julio, el 55 por ciento del total de víctimas, cabe señalar que otras estimaciones cifran alrededor de 100 mil víctimas, las cuales tienen bases sólidas por la magnitud de la violencia sionista y la imposibilidad en el terreno de documentar a todas ellas.

La hambruna en Gaza no es una especulación, ya es un hecho real y concreto producto de la ofensiva reaccionaria del sionismo y su condición fascista que desprecia la vida de los palestinos al considerarlos como animales y no como seres humanos.

A pesar del genocidio en curso la ONU no hace nada efectivo por imponer el respeto al derecho internacional, solamente queda en discursos pomposos y la falsa simpatía por el pueblo palestino y su causa justa de reconocimiento del Estado palestino.

Al unísono de la retórica sionista se proyecta en los monopolios de la comunicación y posición de gobiernos reaccionarios o proimperialistas la defensa del Estado de Israel, con ello se adultera la realidad, porque los hechos demuestran que: a) Israel es un Estado ocupante y bajo el derecho internacional no tiene derecho a la defensa; b) El pueblo de palestina tiene el derecho a la defensa, incluida la lucha armada como medio de autoprotección; y, c) La resistencia antisionista-antiimperialista palestina, llámese como se llame, es legítima.

En consecuencia, los reclamos históricos del pueblo palestino y la resistencia son legítimos, su lucha también lo es, porque ante la barbarie sionista la lucha armada revolucionaria es una necesidad política, una exigencia organizativa y un deber político moral.

Israel no se enfrenta a uno, dos, tres o más grupos insurgentes aislados de las masas, se enfrenta a todo un pueblo que ha decidido resistir a través de todas las formas de lucha, entre ellas la

lucha armada revolucionaria como expresión de la voluntad de combatir de todo un pueblo contra el ocupacionista.

Resulta ofensiva y una agresión a la inteligencia humana la exigencia sionista de pedir que Hamas entregue las armas y se desmovilice, es criminal exigir que el pueblo palestino renuncie a su derecho a la defensa, a exigir sea reconocido como Estado y oponerse de manera consciente y organizada a su exterminio como pueblo.

Al pueblo palestino desde gobiernos proimperialistas, imperialistas o prosionistas se le pide que se “desmilitarice”, sin embargo, al Estado sionista de Israel se le arma con tecnología de punta y se le permite desarrollar tecnología militar para el asesinato masivo, se le concede la gracia de que tenga armamento nuclear para que pueda jugar con mejor desempeño el papel de punta de lanza del imperialismo en el Medio Oriente.

Ante el derecho internacional ninguna expresión orgánica de la resistencia palestina es terrorista, por tanto, las afirmaciones de Tel Aviv carecen de validez ante el derecho internacional. El único terrorista armado hasta los dientes que asesina civiles desarmados es el Estado de Israel a través de todo su aparato policíaco, militar y paramilitar.

La lucha por el reconocimiento del Estado palestino avanza, se expresa en el reconocimiento de éste por 147 países de 193 miembros de la ONU; 10 países del G20 también lo reconocen; 12 países europeos también lo hacen; y Francia y Reino Unido anunciaron su reconocimiento para septiembre. Diplomáticamente significa una victoria para el pueblo palestino. ¿Quién se opone a su reconocimiento? Los integrantes del G-7, es decir, el imperialismo en bloque, los principales explotadores y opresores del mundo, éstos son quienes sostienen el régimen opresivo de Israel, son corresponsables del genocidio contra el pueblo palestino.

La concepción sionista sobre el hombre es reaccionaria, profundamente antihumana, queda de manifiesto en las declaraciones de quienes son

testigos del drama del hambre como arma utilizada por el régimen israelita: se compara el reparto de alimentos con “alimentar animales peligrosos en un safari: dejas la comida, abres las puertas y te retiras” de acuerdo a las palabras de Yaakov Garb, académico de la Universidad Ben-Gurión del Néguev; y con horror se expresa que “es una lucha de pánico caótica. Sólo los más fuertes y rápidos sobreviven. Las mujeres y los niños, la mayoría de las veces, no reciben nada”, declara Antony Aguilar, teniente coronel retirado y exboina verde de las fuerzas especiales norteamericanas que cuestiona el régimen sionista y su proceder criminal.

Ambas opiniones confirman la política fascista-sionista de deshumanizar a los palestinos, animalizarlos para justificar el aniquilamiento de la “cosa”, del animal, es decir, de millones de palestinos que se les niega el reconocimiento de seres humanos y derechos políticos como pueblo. Con ello se diluye que Palestina existía mucho antes de la llegada de los primeros colonos judíos; Palestina, su población y territorio, existían antes de 1948; Palestina existe a pesar de que ha sido despojada de la mayoría de su territorio, existe a través de la resistencia armada revolucionaria y la voluntad del pueblo por resistir y enfrentar la ocupación sionista.

La exigencia norteamericana a Rusia

El término de la guerra de la OTAN-Ucrania contra Rusia toma aire y emerge la posibilidad de ponerle fin, un anhelo que de palabra el presidente norteamericano ha empeñado públicamente, sin embargo, el hecho siempre va en sentido contrario.

La amenaza verbal del presidente Trump de aplicar más medidas punitivas contra Rusia en el terreno económico si ésta no pone fin a la guerra, suben de tono y revelan la condición y exigencia real del imperialismo norteamericano: la guerra no puede seguir porque le significa un alto costo económico, político y militar porque la marioneta fascista de Kiev no estuvo a la altura de la exigencia de la OTAN, la guerra en Ucrania dejó de ser negocio lucrativo; y, al mismo tiempo, devela la condición

de inferioridad militar y tecnológica de la OTAN y el bloque imperialista, los países europeos no están en condición de sostener la guerra por sí solos y el imperialismo norteamericano no quiere sostenerla si no hay garantías de ganancia económica.

La respuesta de Rusia fue concreta, la campaña militar de desnazificación y desmilitarización de Ucrania continúa, sin negar la posibilidad de alcanzar la paz, aunque ésta pasa por el combate al fascismo ucraniano y a garantías de seguridad para el pueblo ruso, lo cual significa poner fin al avance criminal de la OTAN para desarticular a Rusia como Estado.

En política cada amenaza proferida por el representante del imperialismo norteamericano, o por los representantes de los Estados hegemónicos de la UE, significan un paso más hacia la guerra mundial en función de la defensa de los intereses económicos, políticos y militares de los países imperialistas agrupados en el G7.

En perspectiva, un mundo multipolar se vislumbra, una expresión concreta de oposición a la hegemonía imperialista norteamericana, ésta se ha traducido en violencia reaccionaria contra los pueblos del mundo; el imperialismo norteamericano pasa a la ofensiva económica, política y militar para recomponer su hegemonía, recurre a la fuerza militar para no perder su papel de gendarme mundial; las posiciones profascistas o abiertamente fascistas se hacen visibles en el mundo, en América Latina se fortalecen con medidas políticas y jurídicas que las establecen en el gobierno de manera indefinida, como sucede en el Salvador y Argentina.

La lucha antiimperialista emerge como una necesidad política inmediata, con ello también una tarea, la de reorganizar la unificación de las fuerzas comunistas en el plano internacional.

PDPR-EPR



AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La desaparición forzada de personas en México es política de Estado transexenal y constituye un crimen de lesa humanidad de dimensiones históricas, en tanto que en ningún periodo de la historia de nuestro país se ha registrado un número de víctimas como el actual, ni siquiera en la llamada guerra sucia; para el pueblo de México el fenómeno de la desaparición forzada representa una tragedia sin precedente alguno en el continente americano, que supera incluso a las dictaduras militares del Cono Sur.

Por comisión, omisión o aquiescencia, inequívocamente la responsabilidad es del Estado mexicano, dicho crimen lo comete el aparato policiaco militar en los tres órdenes de gobierno, por orden de las altas esferas de mando y a la vez éstos se rigen por las leyes del régimen, están involucrados políticos de oficio, funcionarios públicos, oligarcas y defensores del régimen.

Es totalmente falso que la desaparición forzada de personas la cometan “particulares” y antes de la “delincuencia organizada”, éstos son grupos paramilitares que operan con la aquiescencia del Estado, donde la correa de transmisión de mando conduce siempre hasta las cúpulas castrenses. Múltiples declaraciones de “líderes criminales” evidencian los vínculos orgánicos entre el Estado y la “delincuencia organizada”, ésta siempre ha tenido matriz de Estado.

La desaparición forzada de personas, junto a otros crímenes de lesa humanidad, como la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado, está aparejado a intereses oligárquicos, sobre todo en aquellas regiones del país con recursos estratégicos, entre ellos minerales de alto valor.

Las medidas de la actual administración federal en materia de desaparición forzada, aprobadas en la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no resuelven el problema de la desaparición forzada, son leyes de carácter contrainsurgente que tienen como fin profundizar el control social a través del espionaje y medidas profascistas.

Dichas leyes no están diseñadas para dar con el paradero de los desaparecidos, conocer la verdad, y garantizar la no repetición, mucho menos para enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, constituyen una maniobra de la actual junta administrativa para eludir la responsabilidad del Estado mexicano, ante los compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Condición que expresa el grado de perversidad de la actual junta administrativa, que se ha caracterizado por garantizar impunidad a los responsables materiales e intelectuales a través del burocratismo, la dilación, la simulación, la revictimización y la mentira, en la atención a los familiares de las víctimas.

Las cifras oficiales de víctimas, a pesar de que son conservadoras, demuestran que la desaparición forzada es sistemática y generalizada, es un fenómeno exponencial que trasciende sexenios y partidos políticos burgueses, prueba de esto son las cifras del actual sexenio que, en promedio, del tiempo que lleva en funciones, supera a los anteriores.

El más reciente informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo confirma esta verdad, que los familiares de víctimas de este deleznable crimen, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones populares han denunciado y documentado ampliamente.

El problema de la desaparición forzada no se trata solo de una grave crisis de derechos humanos, el fondo radica en que es una política de Estado y violencia de clase contra el pueblo. Si se quisiera atender el problema se tendría que empezar por enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen en los casos ya comprobados jurídicamente.

La desaparición forzada es un fenómeno consustancial al régimen, de ahí que no sea prioridad, ni exista la voluntad política de la actual junta administrativa para resolver de raíz el problema, esto explica el actuar de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que en su proceder revictimiza a los familiares de las víctimas, se constituye en el principal dique en la búsqueda de los desaparecidos y desde esta institución se procura impunidad a los perpetradores.

A tal grado llega la perversidad de las instituciones de procuración de justicia que no se prioriza la búsqueda con vida de las víctimas, a éstas de facto se les da por muertas y se obliga a los familiares a buscar los cadáveres o restos de sus seres queridos en fosas clandestinas, basureros, parajes, ríos, bosques y todo lugar y condición que no involucre al régimen.

¡Hermanas, hermanos, camaradas! La desaparición forzada la comete el Estado, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, a los desaparecidos jamás se les debe dar por muertos, independientemente de los motivos por los cuales se encuentren en esa condición, es responsabilidad del Estado mexicano buscarlos y presentarlos con vida, así como el juicio y castigo a los responsables.

La lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos, es una necesidad política que debe enarbolar todo el pueblo, ésta debe superar todo obstáculo que impone el régimen hasta lograr justicia y se erradique este crimen de lesa humanidad.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 61
República mexicana, a 28 de agosto de 2025

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

III

Antes, Patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la patria aquí fue.

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

IV

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria!
¡un sepulcro para ellos de honor!

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

En el contexto de la intención y amenaza de EUA por intervenir de manera militar en nuestro país, y el eco que le hace la reacción al proponer que se modifique el Himno Nacional Mexicano por ser “violento”, los revolucionarios agrupados en nuestro partido convocamos a todo nuestro pueblo a entonar en montes, valles y ciudades, el himno nacional, que tiene un carácter antiimperialista y nos convoca como mexicanos a defendernos de la agresión imperialista, sea cualesquiera que sea, y a organizar la lucha antiimperialista.

HIMNO NACIONAL MEXICANO

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón,

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.

I

Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,

que en el cielo tu eterno destino

por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo

profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo

un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón,

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.

II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente

de la patria manchar los blasones!

¡guerra, guerra! los patrios pendones

en las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,

los cañones horrísonos truenen

y los ecos sonoros resuenen

con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!...